TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 1557/93, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará Alfredo V. Bonfil, antes Presidente Lic. Luis Echeverría Alvarez, Municipio de Anáhuac, N.L.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver en definitiva los autos del juicio agrario número 1557/93, correspondiente al expediente institucional 2684, relativo al nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "Alfredo V. Bonfil", antes "Presidente Lic. Luis Echeverría Alvarez", Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el treinta de abril de dos mil dos, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de garantías DA1535/2001, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- El veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior emitió sentencia en el presente asunto, cuyo punto resolutivo que interesa, fue del tenor siguiente:

"PRIMERO.- Es de negarse y se niega la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal, que de constituirse se denominaría "ALFREDO V. BONFIL", promovido por un grupo de campesinos radicados en el poblado Kilómetro 24 de la carretera Don Martín, Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, en virtud de no encontrarse predios de posible afectación, y por no existir fincas afectables para ese fin en las diversas entidades federativas del país".

SEGUNDO.- Inconformes con el anterior fallo, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominará "Alfredo V. Bonfil", promovieron juicio de garantías que se radicó bajo el número DA6185/98 ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien mediante ejecutoria de veinticinco de enero de dos mil, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones:

"...Los conceptos de violación que se hacen valer son fundados, de conformidad con las consideraciones siguiente...

...Debe decirse que les asiste la razón a los quejosos, toda vez que contrariamente a lo considerado por la autoridad responsable en la sentencia reclamada, en ella no analizó debidamente las constancias que obran en los autos del juicio agrario, puesto que de haberlo hecho se hubiera percatado de que en el radio de siete kilómetros a partir del poblado más densamente poblado del núcleo solicitante, existen los predios inicialmente localizados como "LOS BERRENDOS", "LA ANGUILA O TANQUE DE DON HIGINIO" y "LAS MULAS", que el propio Cuerpo Consultivo Agrario, reservó para la dotación de un Nuevo Centro de Población Ejidal, según el considerando transcrito con anterioridad del dictamen emitido el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta, del que derivó la Resolución Presidencial cuyo cumplimiento no fue posible por no existir tierras disponibles en el lugar señalado en la propia resolución, datos estos últimos en los que se basó la responsable al emitir la sentencia reclamada; sin tener en cuenta lo razonado en el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, infringiendo con ello lo dispuesto por los artículos 203 y 205, de la Ley Federal de Reforma Agraria;... (motivo por el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal) para el efecto de que el Tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra en que tome en consideración las documentales que obran en el expediente agrario y, en su oportunidad, emita otra".

TERCERO.- En cumplimiento a la anterior ejecutoria, este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que había pronunciado en el presente asunto.

CUARTO.- El once de agosto de dos mil, se emitió una nueva sentencia en el expediente cuyo estudio nos ocupa, la cual en sus puntos resolutivos estableció:

"PRIMERO.- Se declara procedente la acción agraria correspondiente a la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal de la cual se ocupó este expediente.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto, se declara afectable la superficie de 1,459-05-31 (un mil cuatrocientas cincuenta y nueve hectáreas, cinco áreas, treinta y una centiáreas) de los predios denominados "La Anguila" y "Los Berrendos", propiedad de Gustavo, Oscar, Manuel Mario y Arturo de apellidos Ancira González, ubicados en el Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León.

TERCERO.- En consecuencia, se dota al grupo de campesinos gestor, con la superficie de 1,459-05-31 (un mil cuatrocientas cincuenta y nueve hectáreas, cinco áreas, treinta y una centiáreas) antes indicada, para fincarse en ella el Nuevo Centro de Población Ejidal que se denominará "Alfredo V. Bonfil"

antes "Presidente Lic. Luis Echeverría Alvarez", Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, la cual servirá para beneficiar a los 29 (veintinueve) campesinos capacitados cuyos nombres quedaron asentados en el considerando segundo.

QUINTO.- Contra la determinación acabada de transcribir, Gustavo Ancira González y Josefina Ibarra Montemayor de Ancira, así como Eduardo Ancira Garza y Gloria Salazar González de Ancira, interpusieron juicio de garantías que se radicó bajo el número DA1535/2001, ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por ejecutoria de treinta de abril de dos mil dos, concedió a los quejosos, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a las siguientes consideraciones:

"...asiste razón a los quejosos al argumentar que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no tomar en cuenta su escrito de alegatos y las pruebas que se acompañaron al mismo, así como el de no aplicar exactamente el artículo 210 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que en la resolución reclamada se toma como base la fecha de la solicitud de dotación de ejidos y no de la publicación de éste. De lo anterior deriva que el Tribunal responsable no tomó en cuenta dichos alegatos, ya que en la sentencia reclamada sólo menciona que se presentaron alegatos pero sin analizarlos (motivo por el cual se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal) para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario, dejando insubsistente la sentencia reclamada, dicte otra siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria."

SEXTO.- En acatamiento a la ejecutoria precisada en el resultando que antecede, esta autoridad en su carácter de responsable, mediante auto de catorce de junio de dos mil dos, dejó sin efectos la sentencia de once de agosto de dos mil.

SEPTIMO.- Sin embargo, con posterioridad a lo señalado en el resultado que antecede, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, solicitó le fueran remitidos los autos del expediente 1557/93, con la finalidad de sustanciar el recurso de revisión que se había promovido en el juicio de garantías DA445/01.

OCTAVO.- El recurso de revisión en comento, que fue interpuesto por los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Alfredo V. Bonfil", en contra de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo DA445/01, fue desechado, por improcedente, por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante auto de quince de julio de dos mil dos.

NOVENO.- Una vez que se tuvo conocimiento de lo anterior y que se recibieron nuevamente en este Organismo Jurisdiccional las constancias relativas al juicio agrario 1557/93, se turnaron al Magistrado ponente para que elaborara el proyecto de resolución respectivo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el cual se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 2o. fracción I, 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Que en la integración del expediente relativo al nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "Alfredo V. Bonfil", antes "Presidente Lic. Luis Echeverría Alvarez", Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, previstas por los artículos del 326 al 333 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Esto es, el expediente se inició a solicitud, de veintitrés de agosto de mil novecientos setenta, suscrita por un grupo de campesinos que manifestaron radicar en el kilómetro 24 de la carretera "Don Martín" del municipio y Estado antes referidos, dirigida al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para la creación de un nuevo centro de población ejidal.

La referida solicitud fue publicada oportunamente en el **Diario Oficial de la Federación** el veinte de febrero de mil novecientos setenta y uno, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, el veinticuatro de febrero del mismo mes y año. Por su parte cabe señalar que la Dirección General de Nuevos Centros de Población Ejidal, el tres de febrero de mil novecientos setenta y uno, instauró el expediente registrándolo bajo el número 2684.

Así también la capacidad agraria del núcleo de solicitantes, quedó plenamente comprobada en términos de lo dispuesto por los artículos 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al haber suscrito la solicitud que dio origen a este expediente un total de 29 (veintinueve) campesinos, cuyos nombres son los siguientes: 1.- Teodoro Moyeda C., 2.- Julio Alvarez Lozano, 3.- Leopoldo Treviño B., 4.- Pablo Cantú P., 5.- Ernesto Flores Zamora, 6.- J. Cruz Moyeda Morales, 7.- Felipe Pérez G., 8.- Juan Portales Ortiz, 9.- Pedro Portales Ortiz, 10.- Luis Trujillo Reyna, 11.- Federico Rangel Pérez, 12.- José Moyeda G., 13.- Eleodoro Guerrero G., 14.- Guillermo Cantú R., 15.- Miguel Zamora, 16.- Rodolfo Treviño, 17.- Tomás Pérez, 18.- José Campusano A., 19.- Rogelio Campusano Flores, 20.- Manuel Campusano Flores, 21.- Napoleón Chávez L., 22.- Raúl Cantú Pérez, 23.- J. Guadalupe Cantú Pérez, 24.- Pablo Cantú Pérez, 25.- Gregorio Alvarez L., 26.- Guadalupe Martínez, 27.- Mauro Alvarez P., 28.- José García Domínguez y 29.- Manuel M. Villarreal.

Además, obran en autos los trabajos técnicos informativos correspondientes, las opiniones del Delegado Agrario en el Estado de Nuevo León y del Cuerpo Consultivo Agrario, así como las pruebas y alegatos que ofrecieron y presentaron los propietarios de los predios señalados como de probable afectación. En mérito de lo anterior, se estiman satisfechas las formalidades esenciales del debido proceso, al igual que el cumplimiento a las garantías de audiencia y legalidad previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, tienen por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en consecuencia en apego a dicho precepto y en observancia a la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de garantías DA1535/2001, se procede a emitir la presente resolución, la cual se ocupará de analizar si resultan afectables los predios denominados "Los Berrendos", "La Anguila" o "Tanque de Don Higinio" y "Las Mulas", ubicados en el Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, para fincar en ellos el nuevo centro de población ejidal que de constituirse de denominará "Alfredo V. Bonfil".

CUARTO.- Hecho el estudio de las constancias que obran en autos, y en relación a los predios pretendidos por el grupo gestor, se desprende lo siguiente:

El Delegado Agrario en el Estado de Nuevo León, mediante oficio 785 de trece de abril de mil novecientos setenta y uno, comisionó a Fernando Gómez Flores para que se trasladara al kilómetro 24 de la carretera Don Martín, de esa entidad federativa, a efecto de que realizara los trabajos técnicos informativos en los inmuebles señalados como de probable afectación.

El Comisionado de referencia, rindió informe el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y uno, mencionando que elaboró un plano informativo de conjunto con elementos que existían en el archivo de la Delegación, auxiliándose con datos tomados del mosaico aerofotogramétrico del Estado de Nuevo León, en cuyo plano quedaron comprendidos los predios ganaderos siguientes:

"LOS BERRENDOS", propiedad de Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, con superficie de 8,987-22-00 (ocho mil novecientos ochenta y siete hectáreas, veintidós áreas), terrenos de agostadero de buena calidad, dedicados a la explotación ganadera.

"LA ANGUILA", el cual perteneció hasta el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta a Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, con superficie de 9,924-57-40 (nueve mil novecientos veinticuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cuarenta centiáreas); sin embargo, refiere el comisionado que según datos que obtuvo del Registro Público de la Propiedad, en la fecha antes indicada, los citados propietarios vendieron 2,962-74-00 (dos mil novecientos sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas), a Manuel Mario Ancira Garza; 351-71-85 (trescientas cincuenta y una hectáreas, setenta y un áreas, ochenta y cinco centiáreas) y 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas) a Manuel Mario Ancira González y Eduardo Ancira Garza. Asimismo, refiere el comisionado que el predio "La Anguila", se encontró dedicado a la explotación ganadera. Agregando el comisionado en relación a este inmueble, lo siguiente:

"...Según los controles y registro que lleva esta Delegación, aparece que este predio estuvo amparado con decreto-concesión de inafectabilidad ganadera, dictado el 5 de abril de 1944, expedido a favor del señor Manuel Benavides Volpe, protegiendo una superficie de 8,987-22-00 hectáreas; protección que se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, con fecha 15 de agosto de 1945, y examinando el expediente respectivo y los registros aducidos, aparece que la cuota anual de crías establecida fue de 5

cabezas, desprendiéndose de la revisión de documentos que la finca aludida tiene cubiertas sus cuotas hasta el año de 1967, por lo que adeuda los años que siguen hasta el vencimiento de la concesión."

Al informe en comento, se anexaron las constancias que expidió el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la Ciudad de Villaldama, del Estado de Nuevo León, quien certificó que el predio "Los Berrendos", pertenecía en propiedad a Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo de apellidos Ancira, quienes lo había adquirido de Guillermo de la Garza García, en la siguiente forma (aclarando que la superficie señalada en las escrituras no corresponde a la que en realidad tienen los predios):

A).- 4,517-50-00 (cuatro mil quinientas diecisiete hectáreas, cincuenta áreas) mediante contrato de compraventa inscrito el trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, bajo la partida 1 del índice de escrituras públicas, tomo XI del citado Registro Público de la Propiedad.

B).- 4,387-57-40 (cuatro mil trescientas ochenta y siete hectáreas, cincuenta y siete áreas, cuarenta centiáreas), adquiridas mediante contrato de compraventa inscrito el trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, bajo la partida 6 del índice de la gran propiedad, tomo XI.

C).- 3,897-13-89 (tres mil ochocientas noventa y siete hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas), adquiridas mediante contrato de compraventa, inscrito el trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis, bajo la partida 1 del índice de la gran propiedad, tomo XI, del Registro Público de la ciudad de Villaldama, Nuevo León.

Así también, el titular de la oficina registral acabada de referir, certificó que el predio "La Anguila", con superficie de 9,924-57-40 (nueve mil novecientas veinticuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cuarenta centiáreas), pertenecía en propiedad a Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, quienes lo habían adquirido mediante contrato de compraventa inscrito el seis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, bajo la partida 1, del índice de la Pequeña Propiedad. Volumen 1. Libro 1o. Tomo I.

Además de lo que ha quedado expuesto, el comisionado Fernando Gómez Flores, en su informe de dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y uno, al cual nos hemos venido refiriendo, señaló:

"Por todo lo anterior, y dada la situación legal que guardan los predios estudiados dentro del radio legal de afectación y en parte los denominados "Los Berrendos" y "La Anguila" (que incluye "Las Mulas") que según se ha visto pertenece en copropiedad a los señores Ancira y que en conjunto suman una superficie total de 17,974-44-00 hectáreas, clasificadas como de agostadero para cría de ganado y tomando en consideración por otra parte, que en esta región del Estado por la escasez de precipitaciones fluviales, clima cálido, etc. está considerada dentro de la zona desértica, en cuyos lugares se ha establecido un coeficiente medio de agostadero de 20-00-00 hectáreas (artículo 259) por cabeza de ganado mayor o su equivalente, por lo que si se toma en consideración que la pequeña propiedad ganadera, según lo establece el artículo 249 fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria en vigor, la constituye la superficie necesaria para sustentar hasta 500 cabezas de ganado mayor, resulta pues, que calculando ésta en función del índice de agostadero asentado (20-00-00 hectáreas por cabeza de ganado mayor), se requiere para esta explotación una superficie total de 10,000-00-00 hectáreas.

Como los predios en estudio tienen como ya se dijo, 17,974-44-00 hectáreas, resultan afectables 7,974-44-00 hectáreas las cuales por su proximidad con el núcleo solicitante y su calidad, me permito localizar dentro del predio conocido por "Los Berrendos", Municipio de Anáhuac, Nuevo León."

Ahora bien, teniendo en cuenta los datos acabados de describir, el Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el seis de diciembre de mil novecientos setenta y uno emitió su opinión, considerando procedente la solicitud que originó el presente procedimiento agrario, proponiendo conceder 7,974-44-00 (siete mil novecientas setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas) de los predios "Los Berrendos", "Las Mulas" y "La Anguila", copropiedad de Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, para la creación del nuevo centro de población ejidal que se denominaría "Alfredo V. Bonfil".

Mediante oficios 3610/971 y 3609/971 de siete de diciembre de mil novecientos setenta y uno, el citado Delegado, solicitó al Presidente de la Comisión Agraria Mixta y al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que emitieran sus opiniones respecto al expediente de que se trata.

Consta en autos que la Comisión Agraria Mixta formuló opinión, el veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y uno, en el sentido de que podía fincarse el nuevo centro de población ejidal en las

7,974-44-00 (siete mil novecientas setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas) propiedad de Manuel Mario Ancira González y hermanos.

Sin embargo, no obra en el expediente constancia alguna, de que el Jefe del Ejecutivo Local hubiese formulado mandamiento.

Por otra parte, la Dirección de nuevos centros de población ejidal, con fecha doce de julio de mil novecientos setenta y dos, formuló dictamen en los siguientes términos:

Que se concediera para la creación de este nuevo centro de población ejidal una superficie total de 7,974-44-00 (siete mil novecientas setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas) de agostadero de buena calidad dentro de las cuales existe agostadero susceptible de cultivo y humedad, que deberán tomarse de los predios "Los Berrendos", "Las Mulas" y "La Anguila", propiedad de los hermanos Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González.

Ahora bien, el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario, el treinta de marzo de mil novecientos setenta y tres, acordó girar instrucciones al Delegado Agrario en el Estado de Nuevo León, a efecto de que comisionara personal para que se trasladara a los predios en comento, copropiedad de los hermanos Ancira y llevara a cabo el censo pecuario de dichos predios. En virtud de lo anterior, la Delegación Agraria designó por oficio número 2087 de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y tres, a Joaquín Garza Rodríguez quien rindió su informe el dieciséis de agosto del mismo año, del que se desprende que el veintidós de julio de mil novecientos setenta y tres, se trasladó a los predios de referencia, en compañía de Manuel Mario Ancira González como representante de los propietarios, Jacobo Tijerina Moya, representante de la Presidencia Municipal y Aureliano Ibarra, Alcalde segundo judicial del lugar, en su carácter de Notario Público por Ministerio de Ley. Señalando el comisionado que el predio "Los Berrendos", cuenta con pequeñas construcciones en las cuales habita la familia del rancharo encargado de los predios, que se recorrió el predio de que se trata habiendo encontrado un papalote, una pila, un tanque y dos presas, que estaban cercadas en un rectángulo de aproximadamente 80 metros por lado, teniendo puertas de acceso para los dos lienzos del predio inspeccionado, en el cual encontraron 215 (doscientas quince) cabezas de ganado vacuno, marcado con el fierro y señal de Manuel Mario Ancira González, haciendo la aclaración que los terrenos recorridos no tienen caminos definitivos a excepción de la entrada, la cual por el estado que guarda indica que es una servidumbre de paso, no así el resto del terreno el cual se puede cruzar en todos sentidos.

Por lo que toca al predio "La Anguila", el comisionado refiere que en este último existen dos papalotes, una pila y cinco presas, con un total de 224 (doscientas veinticuatro) cabezas de ganado vacuno.

En cuanto al predio "Las Mulas", cuenta con una pila, un papalote y una presa, con 173 (ciento setenta y tres), cabezas de ganado vacuno.

Para constancia de la diligencia que practicó con fecha veintidós de julio de mil novecientos setenta y tres, el comisionado levantó el acta respectiva, firmada por los que en ella intervinieron, haciéndose notar en la misma que en uso de la palabra Manuel Mario Ancira González, manifestó que él y su esposa Graciela Garza de Ancira, son propietarios del predio "Los Berrendos", aclarando que ahora lo conocen como "Tanque de Higinio", que el predio "La Anguila" actualmente es propiedad de Manuel Mario Ancira Garza y el denominado "Las Mulas" corresponde en propiedad a Eduardo Ancira Garza.

Las constancias hasta aquí reseñadas, consistentes en el trabajo técnico informativo, datos registrales e inspección ocular relativos a los predios "Los Berrendos" y "La Anguila", Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, producen plena convicción en el juzgador, por provenir de servidores públicos en ejercicio de las funciones que les confieren las leyes, de acuerdo con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Por otra parte, cabe resaltar que Manuel Mario Ancira González, mediante escrito de siete de febrero de mil novecientos setenta y dos, se dirigió al Delegado Agrario en el Estado de Nuevo León, como representante legal y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos Manuel Mario Ancira Garza y Eduardo Ancira Garza, propietarios de los predios "La Anguila" y "Las Mulas" con superficie de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas) y 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta

y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas), respectivamente, argumentando que consideraba improcedente la creación del nuevo centro de población ejidal en estudio, debido a la falta de procedibilidad a que se refieren los artículos 242 y 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria, además de que dichos predios resultaban legalmente inafectables, por ser pequeñas propiedades ganaderas en explotación, y separadas una de la otra. Asimismo, ofreció como pruebas, en favor de sus representados, las siguientes:

a).- Documental pública consistente en la escritura número 146, pasada ante la fe del Notario Público número 41, en el Estado de Nuevo León, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y

nueve, relativa al contrato de compraventa celebrado por Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo de apellidos Ancira González (en su carácter de vendedores) y Manuel Mario Ancira Garza (comprador) representado por sus señores padres Manuel Mario Ancira González y Graciela Garza de Ancira, respecto del predio rústico conocido con el nombre de "La Anguila", ubicado en la comunidad de La Chancaca del Municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, con superficie de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas); documento que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad con cabecera en Villaldama, bajo el número 3, folios 140, volumen 1o., libro 1, sección primera de la gran propiedad, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta.

b).- Documental pública relativa a la constancia expedida el diez de enero de mil novecientos setenta y dos, por el Presidente Municipal de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, precisando que Manuel Mario Ancira Garza, es propietario del predio "La Anguila", el cual se encontraba dedicado a la explotación de ciento cuarenta y seis cabezas de ganado vacuno, y que además dicho predio había estado explotado por sus anteriores dueños .

c).- Documental privada consistente en la constancia expedida el siete de febrero de mil novecientos setenta y dos, por el Gerente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, señalando que Manuel Mario Ancira Garza, es miembro de la citada asociación ganadera y que en el predio de su propiedad, existían aproximadamente ciento cuarenta y seis cabezas de ganado mayor.

d).- Documental pública consistente en la escritura 147 pasada ante la fe del Notario Público número 41 del Estado de Nuevo León, que contiene el contrato de compraventa de cinco de enero de mil novecientos setenta, por medio del cual Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, enajenaron a Eduardo Ancira Garza, el predio denominado "La Anguila", en la parte que se conocía en ese entonces con el nombre de "Las Mulas", ubicado en la excomunidad de La Chancaca, Municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, con superficie de 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas); documento que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Villaldama, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta, bajo el número 4, folio 141, volumen 1o., libro primero de la sección de la gran propiedad.

e).- Documental pública relativa a la constancia expedida el diez de enero de mil novecientos setenta y dos, por el Presidente Municipal de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, señalando que Eduardo Ancira Garza, propietario del rancho "Las Mulas", dedicaba su predio a la explotación de ciento ochenta y dos cabezas de ganado vacuno y además, que dicho inmueble había estado explotado por sus anteriores dueños.

f).- Documental privada, consistente en la certificación expedida el siete de febrero de mil novecientos setenta y dos, por el Gerente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, precisando que Eduardo Ancira Garza es miembro activo de la citada asociación ganadera y que el predio de su propiedad denominado rancho "Las Mulas", se dedicaba a la explotación de ciento ochenta y dos cabezas de ganado mayor.

g).- Por último Manuel Mario Ancira González en su carácter de representante legal de Manuel Mario Ancira Garza y Eduardo Ancira Garza, anexó copias fotostáticas de los planos correspondientes a los predios, propiedad de sus representados.

Cabe precisar que con total independencia de las pruebas antes señaladas, Manuel Mario Ancira González, mediante escrito de cinco de febrero de mil novecientos setenta y dos (fojas 139, 140 y 141 del legajo I) promoviendo por su propio derecho y como propietario del inmueble conocido con el nombre de "Tanque de Don Higinio", ubicado en el Municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, ofreció como pruebas de su parte las siguientes:

h).- Documental pública relativa a la escritura 155 pasada ante la fe del Notario Público número 41 de Sabinas Hidalgo, Estado de Nuevo León, el treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, referente al contrato de división de la copropiedad del inmueble denominado "La Anguila" y a la compraventa de la superficie de 2,832-86-20 (dos mil ochocientas treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) que se desprendieron del citado terreno y que pasaron a constituir el predio "Tanque de Don Higinio", en favor de Manuel Mario Ancira González. Cabe señalar que en el contrato de mérito intervinieron como vendedores Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González. Así también, se conoce que dicho instrumento notarial fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, según constancia que obra a foja 62 de los autos.

i).- Documental pública relativa a la constancia expedida el diez de enero de mil novecientos setenta y dos, por el Presidente Municipal de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, señalando que Manuel Mario Ancira

es propietario del rancho "Tanque de Higinio", inmueble que lo dedica a la explotación de ciento sesenta cabezas de ganado vacuno, así como que dicho predio había estado explotado por sus anteriores dueños.

j).- Documental pública, consistente en los oficios de veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y uno, suscritos por el Subdirector de Egresos del Estado de Nuevo León, en los cuales se menciona que en la Tesorería General de la citada entidad federativa, habían sido aplicadas como propiedad de Manuel Ancira González, la forma del fierro de herrar cuyo diseño aparece al margen de dichos documentos.

k).- Documental privada relativa a la constancia expedida el siete de febrero de mil novecientos setenta y dos por el Gerente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, certificando que Manuel Mario Ancira González, es miembro activo de la citada asociación ganadera local, y que el predio de su propiedad denominado "Tanque de Don Higinio", se dedicaba a la explotación de ciento sesenta cabezas de ganado mayor.

Por otra parte, Gustavo Ancira González, mediante escrito de once de diciembre de mil novecientos setenta y dos, se dirigió al entonces Director General de Nuevos Centros de Población Ejidal y al Consejero Agrario que en ese entonces conocía del asunto en el Estado de Nuevo León, expresando que, indebidamente se señaló como afectable el predio de su propiedad conocido con el nombre de "Los Berrendos", que no se le notificó en los términos del artículo 14 Constitucional, 329 y 332 de la Ley Federal de Reforma Agraria; que el predio en cuestión era una pequeña propiedad ganadera. Aportando como pruebas las siguientes:

a').- Escritura pública 153 otorgada ante la fe del Notario Público número 41 en el Estado de Nuevo León, el veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, por medio del cual Manuel Mario, Oscar

y Arturo de apellidos Ancira González, mediante contrato de compraventa enajenaron en favor de Gustavo Ancira González, la superficie de 3,897-13-89 (tres mil ochocientos noventa y siete hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas) del predio denominado "Los Berrendos", ubicado en la excomunidad de La Chancaca, Municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, documento que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Villaldama, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta, bajo el número 5, folio 142, volumen 1o., libro 1, sección primera de la gran propiedad. Cabe señalar que en dicho contrato se señaló literalmente lo siguiente:

"Manifiesta la parte vendedora señores Manuel F. (sic) Oscar y Arturo Ancira González,... que actualmente son propietarios en compañía con el comprador de una porción de terreno de agostadero compuesta de 3,897.13-89 tres mil ochocientos noventa y siete hectáreas, mil trescientas ochenta y nueve metros cuadrados que integran el predio rústico conocido con el nombre "Los Berrendos"...

(Que) el legal dominio del inmueble anterior, lo demuestran con escritura pública de división de fecha 10 de septiembre de 1956, pasada ante la fe de la Notaría Pública adscrita al Juzgado Segundo Local de esta Ciudad, debidamente requisitada, inscrita bajo el número 9, folio 78, libro XII, Sección Primera. Subsección... con fecha 4 de noviembre de 1957...

(En) El predio anterior... Los vendedores poseen en propiedad exclusiva lotes de 1,000-00-00 hectáreas cada uno, los dos primeros y de ochocientos noventa y siete hectáreas, mil trescientos noventa y nueve metros cuadrados el último, pertenece al comprador un lote de mil hectáreas dentro del mismo, las cuales fueron un solo cuerpo, siendo objeto de esta venta dos mil ochocientos noventa y siete hectáreas, mil trescientas ochenta y cuatro metros cuadrados".

De la anterior transcripción, se deduce que Gustavo Ancira González, compró de sus hermanos 2,897-13-89 (dos mil ochocientos noventa y siete hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas), las cuales sumadas a las 1,000-00-00 (mil hectáreas), que ya le correspondían, hacen un total de 3,897-13-89 (tres mil ochocientos noventa y siete hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas) que del predio "Los Berrendos" pasaron a ser exclusiva propiedad de Gustavo Ancira González.

b').- Documental pública consistente en el oficio de once de diciembre de mil novecientos setenta y dos suscrito por el Presidente Municipal de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, haciendo constar que Gustavo Ancira González es propietario del rancho "Los Berrendos" en una extensión de 4,000-8 (cuatro mil hectáreas, ocho áreas) (sic) dedicándolo a la explotación de doscientas ochenta y una cabezas de ganado vacuno.

c).- Documental pública relativa a los oficios de veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y uno, suscritos por el Subdirector de Egresos del Gobierno del Estado de Nuevo León, en los cuales se menciona que en la Tesorería General de la citada Entidad Federativa, fue registrada como propiedad de Gustavo Ancira González la forma de fierro de herrar cuyo diseño aparece al margen de los documentos mencionados.

Ahora bien, mediante oficio 5662 de siete de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, el Delegado Agrario en el Estado de Nuevo León, comisionó a Oscar Andrade Herrera para que llevara a cabo un nuevo levantamiento topográfico de los predios denominados "Los Berrendos" y "La Anguila", ubicados en el Municipio de Anáhuac de la citada entidad federativa; comisionado que rindió informe el nueve de noviembre del año acabado de referir, en los siguientes términos:

"Con fecha 7 del presente mes me entrevisté con los C.C. Arturo Ancira González y Gustavo Ancira González, habiendo manifestado la primera de las personas citadas que él no es propietario de ninguno de los predios que se mencionan en mi oficio, entregándome una copia de un escrito dirigido a usted con fecha 23 de octubre de este año y recibido en esa Delegación el día 30 de ese mes, además dichas personas expresaron que en virtud de que ellos tienen plano de las propiedades de Manuel Mario Ancira Garza

y Gustavo Ancira González, los cuales me proporcionaron, no consideran necesario que se haga ningún levantamiento topográfico... Con referencia al memorándum que me dirigió el C. Ing. César A. Tijerina G. con fecha 7 de noviembre de 1978... En el que manifiesta que el objetivo fundamental de efectuar los levantamientos de los predios de las personas mencionadas es el de elaborar un anteproyecto de localización que se ajuste estrictamente a las siguientes superficies: del predio del C. Gustavo Ancira González y Josefina Ibarra de Ancira, 4,010-00-00 hectáreas, del predio de Arturo Ancira González 1,270-02-00 hectáreas, y de la propiedad de Manuel Mario Ancira Garza 820-00-00 hectáreas, debiendo localizarse dentro de esa superficie (un) total de 6,100-02-00 hectáreas, 160-00-00 hectáreas de humedad y 240-00-00 hectáreas de temporal, me permito informar a usted que el citado anteproyecto no podría ajustarse a esas instrucciones en virtud de que el C. Arturo Ancira González no es propietario de ninguno de los predios que se mencionan..."

Con la finalidad de verificar lo declarado por Arturo Ancira González, se comisionó al licenciado José Díaz Samia, quien mediante informe de veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (fojas 366 a 371 del legajo V), señaló que de acuerdo a la investigación que realizó en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Villaldama, Nuevo León, encontró los siguientes datos:

"Arturo Ancira González. 1.- Reg. No. 31, Libro 36, de fecha 21 de junio de 1951.- Mpio. de Lampazos.- Sup. 500-00-00 Has.- CANCELADO con fecha 19 de febrero de 1970.

2.- Reg. No. 29 (el Folio es el 159, Libro 41 del 22 de febrero) correspondiente al año 1962.- Mpio. de Lampazos.- Sup. 3,384-00-00 Has.- CANCELADO con fecha 19 de febrero de 1970.

3.- Reg. No. 20 (debe ser No. 29), Folio 155, Libro 41, del 27 de febrero (debe ser 22 de febrero de 1962).- Mpio. de Lampazos Sup. 830-33-00 Has.- Piedra Parada y Pro-Lampazos es el mismo predio y las 830-33-00 Has. son parte integrante de las 3,384-00-00 Has. mencionadas en el número anterior, las cuales se encuentran CANCELADAS con fecha 19 de febrero de 1970.

4.- Reg. No. I, Tomo XI, correspondiente al año de 1956 (el Folio es del 164 al 179 y la fecha es el 13 de abril).- CANCELADO, con fecha 19 de febrero de 1970.

5.- Reg. No. 107, correspondiente al 4 de febrero de 1953.- Mpio. de Sabinas Hidalgo.- Sup. 210-00-00 Has.- VIGENTE.

6.- Reg. No. 123, correspondiente al 2 de mayo de 1958.- Mpio. de Sabinas Hidalgo.- Sup. 472-00-00 Has.- VIGENTE.

7.- Reg. No. I, Folios 164 al 179, Tomo XI y Reg. No. 6, Folio 20 Tomo XI, las dos inscripciones de fecha 13 de abril de 1956.- Mpio. de Anáhuac.- Sup. 1,270-02-02 Has.- La inscripción No. 6 no existe, ya que no aparece en los Libros de Registro.- La inscripción No. I.- CANCELADA con fecha 19 de febrero de 1970.

8.- Reg. No. 31, Folio 14, Libro 36, de fecha 21 de junio de 1951.- Mpio. de Lampazos.- Sup. 579-66-66 Has.- Los datos de Registro son iguales al número I (uno) de esta relación y son 500-00-00 Has. la superficie registrada a su favor, por lo tanto están repetidos los datos.

9.- Reg. No. I Fol. I, Libro 3 de fecha 13 de enero de 1971. Mpio. de Lampazos.- Sup. 1,497-02-00 Has.- VIGENTE".

Las escrituras públicas antes reseñadas, aportadas a los autos por Manuel Mario Ancira González y Gustavo Ancira González, reseñadas con los incisos a), b), h) y a'), así como los antecedentes registrales acabados de señalar, producen plena convicción por tratarse de documentos elaborados y certificados por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, atento a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, constancias que como se verá más adelante, son determinantes para resolver este asunto.

Ahora bien, es importante puntualizar y reiterar, que mediante dictamen de dieciséis de abril de mil novecientos ochenta, emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario (al cual por cierto hace alusión la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que aquí se cumplimenta), se determinó en la parte que interesa lo siguiente:

"SEXTO.- No obstante que de los estudios previos de fechas veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos y doce de julio del mismo año, formulados por la Dirección General de Nuevos Centros de Población Ejidal, se tiene proyectado afectar en el primero una superficie de 2,500-00-00 hectáreas, propiedad de los señores Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González y en el segundo una superficie de 7,974-44-00 hectáreas, que deberán tomarse de los predios "Los Berrendos", "Las Mulas" y "La Anguila", propiedad de los hermanos Manuel Mario, Oscar, Gustavo y Arturo Ancira González (sic).

SEPTIMO.- Tomando en cuenta que los trabajos de campo adolecen de deficiencias técnicas que impiden precisar la afectabilidad del terreno localizado por dicho comisionado, resulta procedente turnar copia del presente dictamen a la Dirección de Planeación Agraria para el efecto de que ordene lo conducente y se determine la afectabilidad de la superficie propuesta y en su oportunidad se destine para la creación de algún otro Nuevo Centro de Población Ejidal en virtud de que el grupo que motivó el presente expediente será ubicado en el predio denominado "Rincón de Matías" o "El Cañón", mismo que tiene una superficie analítica de 6,306-58-58 hectáreas... predio que se destinó para satisfacer las necesidades agrarias del Nuevo Centro de Población Ejidal de referencia, según dictamen relativo al expediente de ampliación de ejido del poblado LAS ENRAMADAS, del Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León...".

Conviene esclarecer en primer orden, que el expediente de primera ampliación del ejido LAS ENRAMADAS, Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, culminó con la Resolución Presidencial de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de junio del mismo año, y en la cual en su punto resolutivo tercero, destinó la superficie de 6,306-58-58 (seis mil trescientas seis hectáreas, cincuenta y ocho áreas, cincuenta y ocho centiáreas), del predio "Rincón de Matías o El Cañón", para la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal "Alfredo V. Bonfil". Sin embargo, contra el citado fallo del Ejecutivo de la Unión, Manuel Ancira González promovió juicio de garantías, reclamando la omisión de las autoridades agrarias de precisar e identificar en un plano, las 15,000-00-00 (quince mil hectáreas), que en la misma Resolución Presidencial de mérito, se consideraron como propiedad inafectable; juicio constitucional que fue resuelto por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León (bajo el número 3066/87) concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de subsanar la omisión reclamada por el quejoso. Al tratarse de cumplimentar la ejecutoria de referencia, las entonces autoridades responsables, hicieron del conocimiento de la Autoridad Federal la imposibilidad material existente, toda vez que de los trabajos que se llevaron a cabo no se pudieron localizar ni siquiera las 15,000-00-00 (quince mil hectáreas), que ordenó respetar como inafectables la ejecutoria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León. Lo anterior nos lleva a la conclusión que no se constituyó jurídicamente el Nuevo Centro de Población "Alfredo V. Bonfil" con motivo de la Resolución Presidencial de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, emitida en el expediente de primera ampliación de ejido del poblado LAS ENRAMADAS, Municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y por lo tanto, es en este expediente donde se debe de resolver lo conducente.

En segundo término es importante precisar, que el dictamen emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta, en sus considerandos sexto y séptimo no señaló que en ese entonces, ya se hubiera demostrado plenamente la causa para considerar afectable en materia agraria, la superficie de 7,974-44-00 (siete mil novecientos setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas), propiedad de Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, y mucho menos que por decisión del aludido Organismo Colegiado, se hubiese reservado la citada superficie para constituir en ella un Nuevo Centro de Población Ejidal, por el contrario, de una lectura cuidadosa a los aludidos considerandos del dictamen formulado por el Cuerpo Consultivo Agrario, se desprende que como los trabajos de campo adolecían de deficiencias técnicas que imposibilitaban determinar la superficie a afectar del terreno localizado por el comisionado Fernando Gómez Flores, se propuso que el asunto debía turnarse a la Dirección de Planeación Agraria para que ordenara lo conducente, es decir, para que se determinara si el predio de los hermanos Ancira González, denominados "Los Berrendos" y "La Anguila", excedía los límites de la pequeña propiedad ganadera en una superficie de 7,974-44-00 (siete mil novecientos setenta

y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas), y una vez hecho lo anterior, se destinara dicho inmueble para establecer en él un Nuevo Centro de Población Ejidal. Sin embargo, no obra en los autos del expediente que aquí se resuelve, constancia alguna en el sentido de que la Dirección de Planeación Agraria hubiese realizado el estudio sugerido por el Cuerpo Consultivo, y mucho menos se encuentra demostrado en el expediente que la superficie de 7,974-44-00 (siete mil novecientas setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas), propiedad de los hermanos Ancira González, haya quedado reservada, por autoridad competente, para establecer en ella un Nuevo Centro de Población Ejidal.

En tal tesitura es inconcuso que corresponde a este órgano jurisdiccional, analizar las constancias que integran el expediente en estudio, para resolver lo correspondiente respecto de la acción agraria que motivó la instauración del mismo, lo cual se procede a realizar a continuación.

QUINTO.- Por razón de método y técnica jurídica, conviene ocuparse de los alegatos formulados en el asunto cuyo estudio nos ocupa, por parte de las personas que se ostentaron como representantes legales de los titulares de los predios que se pretenden afectar.

Así las cosas, debe decirse que Mario Ancira González, en el escrito de siete de febrero de mil novecientos setenta y dos, que obra de la foja 123 a la 125 del legajo sin carátula, caja 5 (sic), compareció en ejercicio de la patria potestad de sus hijos Manuel Mario Ancira Garza y Eduardo Ancira Garza, manifestando en vía de alegatos textualmente lo siguiente:

“1o. Considero improcedente la constitución del Nuevo Centro de Población pues en la especie falta el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 492 en relación con los 242 y 244 de la Nueva Ley de Reforma Agraria.

En efecto, de acuerdo con lo establecido por el precepto número 244 del Ordenamiento Legal mencionado “procederá la creación de un nuevo centro de población cuando las necesidades del grupo capacitado para constituirlo no puedan satisfacerse por los procedimientos de Restitución, Dotación o Ampliación de Ejidos o de acomodo en otros ejidos”. Por su parte el artículo 242 establece que: “si no fuese posible satisfacer las necesidades del poblado por estos procedimientos, se hará la declaratoria de déficit de unidades de dotación y se procederá a acomodar a los campesinos con derechos a salvo en los ejidos inmediatos con tierras disponibles”. Una interpretación conjunta de las disposiciones transcritas nos llevan a las siguientes conclusiones: I.- Que los solicitantes del nuevo centro de población deben de ser personas capacitadas, es decir, que los núcleos de población peticionarios del Nuevo Centro, estén constituidos por campesinos cuyos derechos agrarios ya fueron reconocidos; II.- Que la satisfacción de las necesidades agrarias del núcleo solicitante no hubiere sido posible lograrlo a través de un procedimiento de Dotación, Restitución, Ampliación o acomodo de los campesinos en otros ejidos.

Esto es lógico si tomamos en cuenta que la constitución de un Nuevo Centro de Población es un procedimiento subsidiario para satisfacer necesidades agrarias, y en el caso concreto es evidente que no se ha justificado ninguna de las exigencias señaladas en las disposiciones legales que se invocan, pues no aparecen constancias de que los peticionarios fueren sujetos capacitados, no obran tampoco elementos que acrediten la imposibilidad de acomodarlos en otros ejidos o bien de satisfacer sus necesidades a través de los diversos procedimientos de Dotación, Restitución, Ampliación o Habilitación de nuevas tierras para el cultivo como lo exige la ley.

2o.- Independientemente del alegato contenido en el punto que precede, estimo también que los terrenos de mis representados son inafectables habida cuenta que la capacidad forrajera de cada uno es insuficiente para mantener quinientas cabezas de ganado, estando muy lejos de exceder en superficie de la establecida para la pequeña propiedad ganadera en los artículos 27 fracción XV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 249 fracción IV de la Nueva Ley de Reforma Agraria.

En vista de lo expuesto en el párrafo anterior y en la primera parte de la precitada fracción XV del artículo 27 Constitucional, resultan legalmente inafectables los terrenos de agostadero de mis representados conocidos con el nombre de “La Anguila” y “Las Mulass” del municipio de Ciudad Anáhuac, N.L. por constituir pequeñas propiedades ganaderas independientes, en activa explotación, como se acredita con las pruebas documentales a que se ha hecho mérito.”

Así también, Manuel Mario Ancira González en su escrito de cinco de febrero de mil novecientos setenta

y dos, dirigido al Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que obra de la foja 139 a la 141 del legajo sin carátula, manifestó en vía de alegatos textualmente lo siguiente:

“1o. Considero improcedente la constitución del Nuevo Centro de Población pues en la especie falta el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 492 en relación con los 242 y 244 de la Nueva Ley de Reforma Agraria.

En efecto, de acuerdo con lo establecido por el precepto número 244 del Ordenamiento Legal mencionado “procederá la creación de un nuevo centro de población cuando las necesidades del grupo capacitado para constituirlo no puedan satisfacerse por los procedimientos de Restitución, Dotación o Ampliación de Ejidos o de acomodo en otros ejidos”. Por su parte el artículo 242 establece que: “si no fuese posible satisfacer las necesidades del poblado por estos procedimientos, se hará la declaratoria de déficit de unidades de dotación y se procederá a acomodar a los campesinos con derechos a salvo en los ejidos inmediatos con tierras disponibles”. Una interpretación conjunta de las disposiciones transcritas nos llevan a las siguientes conclusiones: I.- Que los solicitantes del nuevo centro de población deben de ser personas capacitadas, es decir, que los núcleos de población peticionarios del Nuevo Centro, estén constituidos por campesinos cuyos derechos agrarios ya fueron reconocidos; II.- Que la satisfacción de las necesidades agrarias del núcleo solicitante no hubiere sido posible lograrlo a través de un procedimiento de Dotación, Restitución, Ampliación o acomodo de los campesinos en otros ejidos.

Esto es lógico si tomamos en cuenta que la constitución de un Nuevo Centro de Población es un procedimiento subsidiario para satisfacer necesidades agrarias, y en el caso concreto es evidente que no se ha justificado ninguna de las exigencias señaladas en las disposiciones legales que se invocan, pues no aparecen constancias de que los peticionarios fueren sujetos capacitados, no obran tampoco elementos que acrediten la imposibilidad de acomodarlos en otros ejidos o bien de satisfacer sus necesidades a través de los diversos procedimientos de Dotación, Restitución, Ampliación o Habilitación de nuevas tierras para el cultivo como lo exige la ley.

2o.- Independientemente del alegato contenido en el punto que precede, estimo también que los terrenos de mis representados son inafectables habida cuenta que la capacidad forrajera de cada uno es insuficiente para mantener quinientas cabezas de ganado, estando muy lejos de exceder en superficie de la establecida para la pequeña propiedad ganadera en los artículos 27 fracción XV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 249 fracción IV de la Nueva Ley de Reforma Agraria.”.

Son infundados los alegatos vertidos por Manuel Mario Ancira González, promoviendo por su propio derecho y como representante legal de Manuel Mario Ancira Garza y Eduardo Ancira Garza, consistentes en que en la especie no se surte el requisito de procedibilidad, contemplado por los artículos 242 y 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para la creación de un nuevo centro de población ejidal.

En efecto, si bien es cierto los numerales acabados de invocar consignan que para el caso de que a través de un procedimiento de restitución de tierras, dotación o ampliación de ejido, e inclusive de acomodo de capacitados en materia agraria, no fuera posible satisfacer las necesidades agrarias de los grupos de campesinos, se procedería a ventilar un expediente para la creación de un nuevo centro de población ejidal; sin embargo también es igualmente cierto que la propia Ley Federal de Reforma Agraria en su Libro Quinto, correspondiente a los procedimientos agrarios, específicamente en su capítulo séptimo, establece la forma mediante la cual se podría iniciar o tramitar la acción relativa a la creación de un nuevo centro de población ejidal, así las cosas el artículo 326 del ordenamiento legal en cita, establece que en los casos en que en un procedimiento de dotación, el Cuerpo Consultivo Agrario emitiera un dictamen negativo, en tal supuesto la Secretaría de la Reforma Agraria estaba obligada a notificar al Comité Particular Ejecutivo del poblado gestor, tal opinión y a ordenar que se iniciara el expediente de nuevo centro de población ejidal para satisfacer las necesidades agrarias del poblado interesado.

No obstante, de una interpretación correcta al diverso precepto 327 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se advierte con notable claridad que los expedientes relativos a la creación de nuevo centro de población, se podían iniciar de oficio, conforme a las disposiciones del artículo 326 acabado de señalar, o a solicitud de los interesados, quienes podrían señalar los predios presuntamente afectables y expresar su conformidad de trasladarse al sitio donde fuera posible establecerlo, para este último caso bastaba que se presentara la solicitud correspondiente ante el Delegado Agrario en cuya jurisdicción vivieran los solicitantes de tierras.

De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que en una primera hipótesis, para tramitar un expediente de creación de nuevo centro de población ejidal, era menester agotar previamente los procedimientos de restitución, dotación o ampliación de ejido e inclusive el acomodo de capacitados en

otros núcleos agrarios, y para el evento de que no prosperaran dichas acciones, la Secretaría de la Reforma Agraria estaba obligada a instaurar de oficio el procedimiento de creación de nuevo centro de población ejidal. Pero también la Ley Federal de Reforma Agraria, contemplaba una segunda hipótesis, totalmente independiente a la acabada de apuntar, y en la cual no figuraba como requisito de procedibilidad, para la tramitación de un expediente de creación de nuevo centro de población ejidal, el haber agotado los diversos procedimientos ya señalados, sino que bastaba la sola presentación de la solicitud del grupo de campesinos interesados ante el Delegado Agrario, para que el expediente correspondiente se pudiera iniciar, a esta forma de trámite, se le denominaba a solicitud de parte interesada, para diferenciarla de aquella otra que se instauraba de oficio.

Luego entonces, en el presente asunto los alegatos vertidos en el sentido de la supuesta falta de los requisitos de procedibilidad contemplados en los artículos 242 y 244 de la Ley Federal de Reforma Agraria, devienen infundados, al haberse acreditado que el expediente cuyo estudio nos ocupa se inició a solicitud formulada el veintitrés de agosto de mil novecientos setenta, por un grupo de campesinos que manifestaron radicar en el kilómetro 24 de la carretera Don Martín, del Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, dirigida al entonces departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para la creación de un nuevo centro de población ejidal, por lo tanto, el expediente de mérito no se instauró de oficio y por esa razón no se requiere que el grupo de campesinos que promovieron en el presente asunto, agotaran previamente los procedimientos de restitución, dotación o ampliación de ejido o la acción de acomodo en otros núcleos agrarios.

A mayor abundamiento, conviene reiterar en este apartado, que los campesinos que integran el grupo gestor, manifestaron en su solicitud su deseo de trasladarse al sitio donde fuera posible establecer el nuevo centro de población ejidal, y que además dicha solicitud fue oportunamente publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veinte de febrero de mil novecientos setenta y uno, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León el veinticuatro del mes y año acabado de invocar, con lo cual se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 327 y 329 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por último, no pasa inadvertido que también se alega la falta de observancia de lo dispuesto en el artículo 449 del ordenamiento legal acabado de invocar, el cual consigna que las autoridades agrarias estaban obligadas a comunicar al Registro Público de la Propiedad, para que realizaran anotaciones marginales preventivas en los documentos que ampararan la propiedad de los terrenos sobre los que existían solicitudes agrarias, sin embargo, la omisión de tal aspecto, no puede considerarse un requisito de procedibilidad para la acción agraria del nuevo centro de población ejidal, porque la ausencia de las indicadas anotaciones marginales, carecían de consecuencias jurídicas definitivas, en la medida en que la anotación preventiva a la cual alude el numeral en cita, quedaba supeditada a surtir efectos, siempre y cuando al emitirse la resolución definitiva, se afectara el terreno en beneficio del grupo solicitante.

Por otra parte, y por lo que respecta a los alegatos consistentes en que los predios defendidos por Manuel Mario Ancira González, promoviendo por su propio derecho y como representante legal de Manuel Mario Ancira Garza y Eduardo Ancira Garza, devienen inafectables, ello se analizará en el siguiente considerando.

SEXTO.- De acuerdo con el resultado de los trabajos técnicos informativos, practicados por el comisionado Fernando Gómez Flores, contenidos en el informe de dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y uno, y de las constancias que del Registro Público de la Propiedad anexó al mismo, con valor probatorio pleno por haberse suscrito por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les confieren las leyes, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se demuestra:

I.- Que el predio "Los Berrendos" localizado en el Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León, con superficie real de 8,987-22-00 (ocho mil novecientos ochenta y siete hectáreas, veintidós áreas), de agostadero de buena calidad, pertenecía en propiedad a Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, quienes lo habían adquirido mediante tres contratos de compraventa celebrados el trece de abril de mil novecientos cincuenta y seis.

II.- Que por lo que respecta al predio "La Anguila", con superficie real de 9,924-57-50 (nueve mil novecientos veinticuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas), ubicado en el Municipio de Anáhuac, Nuevo León, pertenecía en propiedad también Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo de apellidos Ancira González, quienes lo adquirieron por contrato de compraventa, inscrito en el Registro Público de la Propiedad el seis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

Ahora bien, el comisionado Fernando Gómez Flores, señaló que tomando en cuenta la copropiedad existente en los predios "Los Berrendos" y "La Anguila", y que éstos sumados daban un total de 17,974-44-00 (diecisiete mil novecientos setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas) de agostadero, lo cual aunado al hecho de que el coeficiente de agostadero señalado para la región donde se localizan dichos inmuebles, era supuestamente de 20-00-00 (veinte hectáreas), por cabeza de ganado mayor, todo ello lo llevó a concluir que de la superficie antes señalada, resultaban afectables 7,974-44-00 (siete mil novecientos setenta y cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas), las cuales se deberían de localizar específicamente en el predio denominado "Los Berrendos".

La conclusión final vertida por el comisionado Fernando Gómez Flores, es de desestimarse porque contiene una deficiencia técnica, que resulta fundamental, a saber: No mencionó la forma en que obtuvo el coeficiente de agostadero que refirió, pues para ello era indispensable que al menos tomara como base el coeficiente de agostadero ponderado de la región, registrado ante la autoridad competente. Sin embargo

y por lo que se refiere a las superficies reales que localizó el citado comisionado, relativas a los predios "La Anguila" y "Los Berrendos", a dicha parte inicial de su informe, se le atribuye pleno valor probatorio, atento a lo señalado por el precepto 286 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por otra parte, de las escrituras públicas que obran a fojas 130, 134 y 146 del legajo I, las cuales fueron aportadas por Manuel Mario Ancira González y Gustavo Ancira González, con valor probatorio pleno por haber sido elaboradas, y posteriormente certificadas por un Fedatario Público, se conoce fundamentalmente:

a).- Que mediante contrato de división de copropiedad y a la vez de compraventa, de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Villa Aldama, Nuevo León, bajo el número 7, folio 1214, volumen I, libro 1, sección primera de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta, los hermanos Gustavo, Oscar y Arturo Ancira González, enajenaron en favor de Manuel Mario Ancira González, 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas), del predio "La Anguila", fracción de terreno que pasó a denominarse "Tanque de Don Higinio".

b).- Mediante contrato de compraventa de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Villa Aldama, Nuevo León bajo el número 3, folio 740, volumen I, libro 1, sección primera, de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta, los hermanos Ancira González, enajenaron en favor de Manuel Mario Ancira Garza 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas) del predio "La Anguila", y

c).- Mediante contrato de cinco de enero de mil novecientos setenta, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Villa Aldama, Nuevo León, bajo el número 4, folio 141, volumen I, libro 1, sección primera, de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta, los hermanos Ancira González enajenaron en favor de Eduardo Ancira Garza, 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas) del predio "La Anguila", fracción que pasó a denominarse "Las Mulas".

Las tres compraventas antes aludidas, se consideran válidas y surtieron efectos jurídicos, toda vez que se celebraron, no sólo con anterioridad al veintitrés de agosto de mil novecientos setenta, fecha esta última en la cual fue presentada la solicitud del grupo de campesinos, para constituir el nuevo centro de población ejidal que dijeron se denominaría "Alfredo V. Bonfil", sino además antes de la publicación de la mencionada solicitud que dio origen a este expediente, realizada, el veinte de febrero de mil novecientos setenta y uno, en el **Diario Oficial de la Federación**, y el veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y uno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es decir, las superficies de 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) que corresponden exclusivamente en propiedad a Manuel Mario Ancira González y que conforman el predio denominado "Tanque de Don Higinio", así como la diversa superficie de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas) que corresponden en propiedad exclusiva a Manuel Mario Ancira Garza, y que también se deriva del predio conocido como "La Anguila", al igual que la extensión de 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas), que pertenece en propiedad a Eduardo Ancira Garza, tales inmuebles fueron adquiridos mediante los contratos de compraventa que han quedado reseñados, los cuales se celebraron con fechas anteriores a la publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, de la solicitud presentada por el grupo de campesinos que solicitaron la constitución o creación del nuevo centro de población ejidal que dijeron se denominaría "Alfredo V. Bonfil", y por lo tanto a tales ventas, mediante las cuales se dividió el original predio denominado "La Anguila", no

les es aplicable lo dispuesto por el artículo 210 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria, que literalmente dispone:

“ARTICULO 210.- La división y el fraccionamiento así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria, a las reglas siguientes:

I.- No producirán efectos los realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de restitución, ampliación, dotación ni de las relativas a nuevos centros de población en las que se señalen los predios afectables, o de la publicación del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio, ni los que se realicen con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 332...

II.- Si se hubieran hecho con anterioridad a la fecha indicada en la fracción I, se considerarán válidos en los casos siguientes:

a).- Cuando la traslación de dominio a favor de los adquirentes, se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad antes de la fecha indicada, aun mediando autorización de la Secretaría de la Reforma Agraria para la realización del fraccionamiento.

b).- Cuando sin haberse operado la traslación de dominio a favor de los adquirentes, éstos posean, como dueños, sus fracciones en los términos del artículo 252...”.

Tomando en cuenta el texto acabado de transcribir, es inconcuso que los contratos de compraventa, que en líneas anteriores quedaron señalados bajo los incisos a), b) y c), no pueden ser analizados a la luz del supuesto normativo regulado por la fracción I del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria, porque dichos contratos se verificaron no con posterioridad, sino con anterioridad a la publicación de la solicitud del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría “Alfredo V. Bonfil”, consecuentemente, la hipótesis legal bajo cuyo amparo deben estudiarse los multirreferidos contratos, es la contenida en la fracción II del precepto legal en comento.

Así las cosas, debe decirse en principio que no está aprobado en autos que el predio “La Anguila”, con superficie de 9,924-57-50 (nueve mil novecientas veinticuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) guardara la condición de afectable en materia agraria, antes de que se realizara la publicación de la solicitud del grupo gestor y de este expediente, de veinte de febrero de mil novecientos setenta y uno, es decir, no se acreditó que el inmueble de referencia, rebasara los límites de la pequeña propiedad agrícola o ganadera establecida por el numeral 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria o, en su caso, que hubiese permanecido inexplorado durante dos años consecutivos, como así lo consigna el precepto 250 del ordenamiento legal acabado de invocar, de donde se sigue que no habiéndose demostrado la condición de afectable del predio de referencia, antes de la publicación de la solicitud que motivó la instauración de este expediente, ello por si solo sería suficiente para considerar válidos los contratos de compraventa de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve y cinco de enero de mil novecientos setenta, en virtud de los cuales se dividió y fraccionó el predio “La Anguila”, con superficie de 9,924-57-50 (nueve mil novecientas veinticuatro hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas), pero con total independencia de la conclusión aquí alcanzada, debe decirse que el hecho de que los contratos de compraventa acabados de puntualizar hayan sido inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y de que en ellos conste claramente la traslación de dominio efectuada a favor de los compradores, ello también conlleva a considerarlos válidos, por así disponerlo expresamente el artículo 210 fracción II del ordenamiento legal líneas arriba invocado.

A mayor abundamiento, y tomando en cuenta que los tres predios que ocupan nuestra atención, denominados “Tanque de Don Higinio”, con superficie de 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas), predio “La Anguila”, con superficie de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas) y predio “Las Mulas”, con superficie de 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas), se dedican a la explotación de ganado, tal y como se corrobora en el informe de dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y tres, rendido por el comisionado Joaquín Garza Rodríguez, y que de acuerdo a las constancias recabadas por este órgano jurisdiccional, de la Comisión Técnica de Coeficiente de Agostadero, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con valor probatorio pleno, las cuales fueron agregadas mediante auto de diecinueve de junio de dos mil, de todo ello se advierte que los predios “La Anguila”, “Tanque de Don Higinio” y “Las Mulas”, tienen señalado un coeficiente de agostadero de 15.40 hectáreas, por cabeza de ganado mayor, es incontestable que ninguno de los tres inmuebles antes referidos, rebasa la superficie de 7,700-00-00 (siete mil setecientas hectáreas), que de acuerdo al citado coeficiente constituye la superficie necesaria para alimentar hasta quinientas cabezas de ganado mayor. Así las cosas, el inmueble “Tanque de Don Higinio” de 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) propiedad de Manuel Mario Ancira González, el

terreno "La Anguila" de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas), propiedad de Manuel Mario Ancira Garza, y el terreno de 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas) denominado "Las Mulas", perteneciente a Eduardo Ancira Garza, por haberse demostrado que se dedican a la explotación de ganado, y por contar con superficies establecidas para la pequeña propiedad, devienen inafectables, atento a lo dispuesto por los artículos 249, fracción IV y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En otro orden de ideas, no pasa inadvertido que Manuel Mario, Gustavo, Oscar y Arturo de apellidos Ancira González, también tenían en propiedad el predio denominado "Los Berrendos", con superficie original y real de 8,987-22-00 (ocho mil novecientas ochenta y siete hectáreas, veintidós áreas), del cual mediante contrato de compraventa celebrado el veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, Oscar, Arturo y Manuel Mario Ancira González, enajenaron en favor de Gustavo Ancira González 3,897-13-89 (tres mil ochocientos noventa y siete hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve centiáreas), compraventa esta última que surtió efectos jurídicos en virtud de haberse celebrado con anterioridad a la publicación de la solicitud que motivó la tramitación del expediente que aquí se resuelve. Así pues y tomando en cuenta lo acabado de expresar, la superficie que del predio "Los Berrendos" será materia de estudio, en los párrafos subsecuentes, se reduce a 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas).

Planteadas así las cosas, debe decirse que el inmueble acabado de referir, deviene inafectable, en virtud de que si bien tenía la extensión de 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas), lo cierto es que ésta, al dedicarse a la explotación ganadera, de acuerdo con lo señalado por el comisionado Joaquín Garza Rodríguez quien rindió su informe el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y tres, y al contar con un coeficiente de agostadero de 15.40 (quince punto cuarenta hectáreas) por cabeza de ganado mayor, es obvio que ese inmueble no rebasa la superficie de 7,700-00-00 (siete mil setecientas hectáreas) que de acuerdo con el citado coeficiente, constituye la necesaria para alimentar hasta quinientas cabezas de ganado mayor, por lo que consecuentemente el predio denominado "Los Berrendos" con extensión de 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas), es inafectable para satisfacer las necesidades agrarias del poblado gestor, atento a lo dispuesto por los artículos 249 fracción IV y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

No pasa inadvertido que Manuel Mario Ancira González, resulta ser propietario de 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) del inmueble denominado "Tanque de Don Higinio", y a la vez, también haya adquirido el predio "Los Berrendos", que después de la enajenación realizada en favor de Gustavo Ancira González, quedó reducido a la extensión de 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas).

Ahora bien, es cierto que el artículo 209 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establece que se considerarán como una sola propiedad los diversos terrenos que pertenezcan a un mismo dueño, aunque se encuentren separados unos de otros, así como los inmuebles que siendo de varios dueños sean poseídos proindiviso, sin embargo, en la especie, no está acreditado que la superficie de 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas) que conforma el predio "Los Berrendos" y que fue adquirido por Manuel Mario Ancira González, en unión de Oscar y Arturo de apellidos Ancira González, se hubiese encontrado poseído en forma de proindivisión, es decir sujeto a un régimen de explotación en común, sin determinarse el derecho sobre la superficie correspondiente, por lo cual no es posible considerar legalmente como único titular de la extensión de terreno acabada de señalar a Manuel Mario Ancira González, y mucho menos sumar esa superficie a la diversa consistente de 2,832-86-20 (dos mil ochocientos treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) que integran el predio denominado "Tanque de Don Higinio".

SEPTIMO.- Ahora bien, es de señalarse que el artículo 331 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establecía que en caso de no localizarse de inmediato terrenos afectables para la constitución de un Nuevo Centro de Población, el expediente instaurado se reservaría para resolverse al momento de que se dispusiera de tierras afectables. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se derogaron las fracciones de la X a la XIV del citado precepto constitucional, las cuales establecían las bases para la dotación de tierras por cualquier vía, y entre ellas se encontraba la figura jurídica del nuevo centro de población ejidal, por lo que al haberse suprimido la aludida disposición legal, resulta impropio efectuar la reserva del asunto que aquí nos ocupa, razón por la cual la presente resolución tiene el carácter de definitiva respecto a la acción agraria de nuevo centro de población ejidal que se hizo valer por el grupo de campesinos, radicados en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, la cual presentaron el veintidós de julio de mil novecientos

setenta y siete, ante el Secretario de la Reforma Agraria, misma que fue publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veintidós de marzo de mil novecientos setenta y ocho.

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que obran en autos las diversas constancias suscritas por los delegados de la Secretaría de la Reforma Agraria, de cada una de las entidades federativas, informando que en sus respectivas jurisdicciones, no existen terrenos reservados para ser destinados a la constitución de un nuevo centro de población ejidal.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Se declara procedente la acción agraria correspondiente a la creación del nuevo centro de población ejidal de la cual se ocupó este expediente.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto, los predios denominados "Los Berrendos", con extensión de 5,090-08-11 (cinco mil noventa hectáreas, ocho áreas, once centiáreas), así como "La Anguila", "Tanque de Don Higinio" y "Las Mulas", con superficies de 2,962-74-00 (dos mil novecientas sesenta y dos hectáreas, setenta y cuatro áreas), 2,832-86-20 (dos mil ochocientas treinta y dos hectáreas, ochenta y seis áreas, veinte centiáreas) y 3,264-39-80 (tres mil doscientas sesenta y cuatro hectáreas, treinta y nueve áreas, ochenta centiáreas), respectivamente, por no rebasar los límites de la pequeña propiedad ganadera, se declaran inafectables, por lo que no procede constituir en ellos el Nuevo Centro de Población Ejidal que se denominaría "Alfredo V. Bonfil", antes Lic. Luis Echeverría Álvarez, Municipio de Anáhuac, Estado de Nuevo León.

TERCERO.- Remítase copia certificada de esta resolución, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en cumplimiento a la ejecutoria dictada el treinta de abril de dos mil dos, en el juicio de amparo DA1535/2001.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, así como a la Procuraduría Agraria.

SEXTO.- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 27/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado Plan de Limón, Municipio de Martínez de la Torre, Ver.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario 27/96, que corresponde al expediente 4450, relativo a la solicitud de ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Plan de Limón", ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el diecinueve de junio de dos mil dos, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictada en el amparo directo número D.A.-4242/2001, en contra de la sentencia pronunciada por este Tribunal Superior el diez de abril de dos mil uno, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- En sesión celebrada el diez de abril de dos mil dos, este Tribunal Superior pronunció sentencia definitiva en el juicio agrario 27/96, relativo a la segunda ampliación de ejido del poblado "Plan de Limón", Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, concediendo al poblado una superficie

de
32-00-00 (treinta y dos hectáreas).

SEGUNDO.- En contra de la sentencia aludida Juana Leyva de Vargas y Rubén Vargas Flores demandaron la protección de la justicia federal. Dicho juicio constitucional le correspondió conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se formó el amparo directo D.A.4242/2001 y previos los trámites legales correspondientes, dicho órgano jurisdiccional pronunció ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil dos, transcribiéndose al efecto las consideraciones fundamentales:

“El análisis del fallo reclamado evidencia que la responsable determinó que el señor Pablo Zorrilla Garcés fue propietario del predio El Negro, con superficie de 600-00-00 (seiscientas hectáreas) de agostadero, ubicadas en el Municipio de Tecolutla, Veracruz, por lo que están fuera del radio legal de afectación; La Pirámide, ubicado en la colonia La Suriana, Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con superficie analítica de 48-70-69 (cuarenta y ocho hectáreas, setenta áreas, sesenta y nueve centiáreas), ubicado fuera del radio legal de afectación; y, el inmueble Cártago, con superficie real de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas), aunque su superficie registral sea de 49-00-00 (cuarenta y nueve hectáreas), este último ubicado dentro del radio legal de afectación; superficies que el Tribunal Superior Agrario sumó para determinar procedente la afectación del predio Cártago.

Este Tribunal Colegiado considera incorrecta la conclusión alcanzada por el tribunal responsable, por las razones fundamentales que a continuación se expresan.

La primera razón que determina la concesión del amparo solicitado, consiste en que la responsable sostiene en el acto reclamado que el señor Pablo Zorrilla Garcés fue propietario del inmueble El Negro, ubicado en el Municipio de Tecolutla, Veracruz; de La Pirámide, sito en Martínez de la Torre, Veracruz, y Cártago.

Sin embargo, la responsable no precisa, como estaba obligada a hacerlo, si los citados inmuebles eran efectivamente propiedad del señor Pablo Zorrilla Garcés, en la fecha en la que se realizó la solicitud de segunda ampliación de ejido.

Efectivamente, la responsable se limita a sostener en el considerando décimo del acto reclamado que Pablo Zorrilla Garcés “fue propietario del predio El Negro”, y que realizó diversas ventas con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud agraria.

Sin embargo, no existe precisión alguna sobre el punto específico anotado, esto es, si a la fecha de formulación de la solicitud de segunda ampliación de ejido el predio El Negro era efectivamente propiedad de Pablo Zorrilla Garcés.

Consecuentemente, la sentencia reclamada no cumple con los requisitos de debida motivación legal.

La segunda razón que lleva a este órgano colegiado a conceder la protección federal solicitada, radica en la circunstancia de que la responsable está sumando la superficie de tres predios, dos de los cuales se ubican fuera del radio legal de afectación (El Negro y La Pirámide), y uno dentro del radio legal de afectación (Cártago), sin precisar razones y fundamento legal que le permita acumular diversas superficies que no se encuentran dentro del radio legal de afectación del poblado solicitante.

Lo anterior es así, dado que la responsable no manifiesta razones y fundamento legal alguno que le permita considerar para los efectos de una afectación, dos inmuebles que están fuera del radio legal de afectación del poblado solicitante, lo cual resulta contrario a la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional.

La tercera razón que orienta el sentido de este fallo, radica en que es verídica la afirmación de la parte quejosa, en el aspecto relativo a que la sentencia reclamada no funda ni motiva su conclusión en el sentido de que Pablo Zorrilla Garcés es propietario del predio La Pirámide, ubicado en la colonia Suriana, con superficie analítica de 48-70-69 (cuarenta y ocho hectáreas, setenta áreas, sesenta y nueve centiáreas).

Ciertamente, en la sentencia reclamada no existe referencia a constancia o asiento registral alguno que acredite fehacientemente que el predio La Pirámide, sito en la colonia La Suriana, del Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, de 48-70-69 (cuarenta y ocho hectáreas, setenta áreas, sesenta y nueve centiáreas), pertenece o perteneció a Pablo Zorrilla Garcés.

Así las cosas, la responsable deberá pronunciarse respecto a la propiedad del predio La Pirámide, en tanto que los pequeños propietarios sostienen que el mismo pertenece a Manuel Zorrilla y Luz Bello de Zorrilla, según inscripción número 507 de veinticuatro de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.

Luego entonces, estamos en presencia de una violación en la sentencia reclamada (indebida fundamentación y motivación), que hace procedente la concesión de la protección federal solicitada.

La cuarta razón que determina la concesión del amparo solicitado, consiste en que en el caso concreto, la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario no cumple con el principio de legalidad, en la medida en que dicha resolución es incongruente.

La comparación que se realiza entre los párrafos transcritos, evidencia que la sentencia reclamada es incongruente, puesto que a fojas 17 de la misma, la responsable sostiene que el predio de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas) está sujeto a explotación ganadera, mientras que a fojas 18 manifiesta que dicha superficie está explotada mediante el cultivo de naranja y limón.

En estas condiciones y como antes se anunció, procede conceder el amparo solicitado.

Este Tribunal Colegiado estima, que ... la responsable, en acatamiento al presente fallo, deberá emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que primero determine si el predio Cártago resulta o no afectable, es decir si su superficie rebasa o no los límites de la pequeña propiedad”.

TERCERO.- Por Acuerdo Plenario de primero de octubre de dos mil dos, se dejó insubsistente la sentencia de referencia.

CUARTO.- Con base en los efectos constitucionales correspondientes, se procede a dictar la resolución ordenada por la ejecutoria a que se hace mérito apreciándose del expediente que, por Resolución Presidencial de nueve de enero de mil novecientos treinta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, el doce de marzo del mismo año, se concedió al poblado de referencia por concepto de Dotación de Tierras, una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), para beneficiar a 24 (veinticuatro) campesinos capacitados, más la parcela escolar, ejecutada en sus términos el veintinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta.

QUINTO.- Por Resolución Presidencial de veinticinco de julio de mil novecientos cincuenta y uno, publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, el diecisiete de enero de mil novecientos cuarenta y dos, se concedió al poblado en estudio, por concepto de primera ampliación de ejido, una superficie de 186-00-00 (ciento ochenta y seis hectáreas) de temporal y monte, para beneficiar a once campesinos capacitados, ejecutada el dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta y dos.

SEXTO.- Por escrito de veintitrés de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, un grupo de campesinos del poblado antes citado, solicitó al Gobernador del Estado de Veracruz, segunda ampliación de ejido, señalando como predios de posible afectación los denominados: “Cerro Quebrado”, “Independencia” y “El Guineo”, ubicados en los municipios de Misantla y Martínez de la Torre, Veracruz.

SEPTIMO.- La Comisión Agraria Mixta instauró el expediente el cinco de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, asignándole el número 4450 y realizando los correspondientes avisos de iniciación.

OCTAVO.- La publicación de la solicitud se realizó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, en el ejemplar de dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, bajo el número 7, tomo LXXXI.

NOVENO.- El Gobernador del Estado de Veracruz, expidió los nombramientos a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, mediante oficios 102, 103 y 104, todos de seis de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, a Jorge Barrientos, Julián Cabañas y Ernesto Marín, como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

DECIMO.- La Comisión Agraria Mixta notificó mediante oficios del 98 al 100 a los propietarios de los predios señalados como presuntamente afectables, y también fijó cédula notficatoria común en la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, para dar a conocer la iniciación del expediente del poblado en comento, a todos los propietarios de los predios ubicados dentro del radio legal de afectación.

DECIMOPRIMERO.- Mediante oficio 1553 de seis de marzo de mil novecientos sesenta y tres, la Comisión Agraria Mixta comisionó personal de su adscripción para corroborar el debido aprovechamiento de los terrenos concedidos en dotación de tierras y primera ampliación de ejido al poblado “Plan de Limón”

y en caso afirmativo, proceder al levantamiento del censo general del poblado peticionario. El comisionado Héctor Robledo García, rindió su informe el veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y tres, en el cual precisó que una vez realizado el recorrido de las tierras concedidas al poblado a que se hace mérito, encontró que las mismas no estaban aprovechadas en su totalidad, ya que 47-00-00

(cuarenta y siete hectáreas) de las otorgadas a este ejido, se localizaron sin explotación. Al respecto el comisionado levantó el acta circunstanciada correspondiente, fechada el diecinueve de marzo de mil novecientos sesenta y tres, suscrita por las autoridades ejidales del ejido "Plan de Limón", así como por el Comité Ejecutivo Agrario de la ampliación y certificada por la autoridad municipal del lugar.

En virtud del resultado negativo de la investigación anterior, no se practicaron trabajos censales ni técnicos e informativos.

DECIMOSEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta del Estado de Veracruz, emitió su dictamen el veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y cuatro en sentido negativo, en virtud de haberse demostrado que los terrenos ejidales concedidos por la vía de dotación de tierras y ampliación de ejido, no estaban totalmente aprovechados.

DECIMOTERCERO.- El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, no emitió mandamiento alguno.

DECIMOCUARTO.- El Delegado Agrario en el Estado de Veracruz, emitió opinión el diez de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco en la que considera procedente confirmar el dictamen negativo de la Comisión Agraria Mixta.

DECIMOQUINTO.- En sesión de veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y uno, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó acuerdo en relación con la acción agraria que se analiza, en el sentido de que las tierras concedidas al poblado peticionario tanto por vía de dotación como por ampliación de ejido sí estaban totalmente aprovechadas, por lo que ante tal situación solicitó a la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz, llevar a cabo trabajos censales, así como técnicos e informativos, con el propósito de que el expediente continúe su trámite legal.

DECIMOSEXTO.- Mediante oficio 20801, de primero de diciembre de mil novecientos setenta y uno, el Delegado Agrario en el Estado, comisionó personal de su adscripción para el efecto de cumplir con el acuerdo anterior y el comisionado rindió su informe el diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos, comunicando que una vez practicada la diligencia censal ordenada, resultaron 37 (treinta y siete) campesinos capacitados.

DECIMOSEPTIMO.- Por motivos que no obran en el expediente, los trabajos técnicos e informativos no se llevaron a cabo, por lo que nuevamente el Cuerpo Consultivo Agrario ordenó a la Delegación Agraria comisionara personal de su adscripción para comprobar el aprovechamiento de los terrenos concedidos a este poblado, y de ser positivo el resultado, practicar los trabajos censales y técnicos informativos correspondientes.

DECIMOCTAVO.- La Delegación Agraria comisionó personal de su adscripción, quien rindió informe el veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y siete, en el que manifiesta que pudo constatar que los terrenos concedidos a este poblado se encuentran totalmente aprovechados por sus integrantes, con cultivos de caña de azúcar, cítricos, plátanos y maíz.

El comisionado practicó la diligencia censal que se le ordenó y del resultado de la misma informó que resultaron 37 (treinta y siete) campesinos capacitados, según junta censal.

Asimismo, el comisionado llevó a cabo los trabajos técnicos e informativos respecto de los cuales, reportó en síntesis que dentro del radio de afectación del poblado peticionario se localizan los ejidos definitivos denominados "El Cañizo", "La Poza", "El Flamenco", "La Piedrilla", "Martha Ruiz", "La Reforma", "La Defensa", "Palpoala Ixcán", "Colorado Chico", "Coapeche", "Vega Redonda", "Independencia", "Pompeya", "Cártago y su anexo Pueblo Viejo", "Loma de las Flores", "Arroyo Negro", "Paso Viejo", "Las Lajas y su anexo Zaragoza" y "Poza del Tigre".

En cuanto a los predios señalados como presuntamente afectables, el comisionado señaló que por lo que toca al denominado "Independencia" no es un predio sino el nombre de un ejido debidamente constituido y por lo que hace a "Cerro Quebrado", no fue localizado ningún predio con este nombre dentro del radio legal del poblado gestor.

En lo atinente al predio "Guineo" o "El Zapotal", señalado también como presuntamente afectable, se deduce de las constancias que obran en autos que el inmueble en comento perteneció originalmente a

Flavia Mata, quien lo adquirió a título de herencia, según inscripción 328 de veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y cinco, con una extensión de 1,800-00-00 (mil ochocientas hectáreas) de agostadero.

Precisó que el mencionado predio contaba con una superficie analítica de 1,771-00-00 (mil setecientas setenta y una hectáreas) de agostadero, de las cuales se afectaron 603-00-00 (seiscientas tres hectáreas), para la dotación del ejido "Paso Viejo", por lo que descontadas las mismas, a dicho predio le restaban

1,168-00-00 (mil ciento sesenta y ocho hectáreas), superficie que la propietaria vendió en su totalidad a Lilia

y Estela Lainz Agüeros, mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 122, de catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Las mencionadas propietarias realizaron diversas ventas, haciéndose la aclaración de que al medirse el predio, éste arrojó una superficie real de 1,178-00-00 (mil ciento setenta y ocho hectáreas), las cuales fueron vendidas de la siguiente forma:

a) 200-00-00 (doscientas hectáreas) a Norberto Rodríguez Boo, según inscripción 42, de treinta de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, dedicadas a la explotación ganadera.

b) 200-00-00 (doscientas hectáreas), a Víctor Hugo Espinoza, según inscripción 43, de la misma fecha del inicialmente mencionado, dedicadas a la explotación ganadera.

c) 200-00-00 (doscientas hectáreas) a Juan Martínez Ruiz, según inscripción 40, de treinta de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, dedicadas a la explotación ganadera.

d) 178-00-00 (ciento setenta y ocho hectáreas), a Joaquín Antonio Martínez, según inscripción 41, de treinta de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, dedicadas a la explotación ganadera.

e) 200-00-00 (doscientas hectáreas) a Héctor Velasco, según inscripción 465 del quince de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, dedicadas a la explotación ganadera, y

200-00-00 (doscientas hectáreas), a Gustavo Melgarejo Velasco, según inscripción 173, de veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, dedicadas a la explotación ganadera.

Asimismo, obran en autos una gran cantidad de operaciones de venta derivadas de las fracciones anteriores, concluyendo el comisionado que en el momento de la inspección realizada y con base en las constancias registrales, las superficies anteriormente descritas se ubicaron de la siguiente forma:

a) 124-25-00 (ciento veinticuatro hectáreas, veinticinco áreas) propiedad de Juan Martín Ruiz.

b) 51-94-81 (cincuenta y una hectáreas, noventa y cuatro áreas, ochenta y una centiáreas), propiedad de Emma Quintanilla de Alba.

c) 51-94-81 (cincuenta y una hectáreas, noventa y cuatro áreas, ochenta y una centiáreas), propiedad de Alfonso Vázquez.

d) 70-20-00 (setenta hectáreas, veinte áreas) propiedad de Severo y Adrián Ortega Monfil.

e) 100-31-38 (cien hectáreas, treinta y un áreas, treinta y ocho centiáreas), propiedad de Manuel Lorenzo Martínez Hachity.

f) 70-04-92 (setenta hectáreas, cuatro áreas, noventa y dos centiáreas), propiedad de Angel García de los Salmones.

g) 18-45-14 (dieciocho hectáreas, cuarenta y cinco áreas, catorce centiáreas), propiedad de Simón López Rocío.

h) 19-02-08 (diecinueve hectáreas, dos áreas, ocho centiáreas), propiedad de Claudio Jácome Rivera.

i) 18-23-37 (dieciocho hectáreas, veintitrés áreas, treinta y siete centiáreas), propiedad de Bruno Jácome Rivera.

j) 17-31-29 (diecisiete hectáreas, treinta y un áreas, veintinueve centiáreas), propiedad de Silvano Jácome Rivera.

k) 36-54-86 (treinta y seis hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, ochenta y seis centiáreas), propiedad de Gilberto Ortega Caro.

l) 175-61-96 (ciento setenta y cinco hectáreas, sesenta y un áreas, noventa y seis centiáreas), propiedad de Juan José Martínez Hachity.

Respecto del régimen de explotación de cada una de las fracciones anteriores y después de haberse realizado la inspección ocular de los predios mencionados en el listado anterior, el comisionado precisó lo siguiente:

“JUAN MARTINEZ RUIZ.- La fracción se denomina “Cruz Alta”, consta de 124-25-00 hectáreas de las cuales 94-50-00 hectáreas tienen el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 197992 de fecha 17 de junio de 1963; se encuentra dividido en 8 potreros cercados con alambre de púas sobre postería de cocuite

y chaca, son terrenos de agostadero de buena calidad dedicados a la ganadería, siendo los pastizales de las variedades conocidas como Estrella y Grama.

EMMA QUINTANILLA DE ALBA.- La superficie total está dedicada a la siembra de la caña de azúcar.

ING. ALFONSO VAZQUEZ.- Su fracción de 51-94-81 hectáreas, están sembradas totalmente de cítricos.

SEVERO Y ADRIAN ORTEGA MONFIL.- Esta fracción de 70-20-00 hectáreas se denomina “La Pochota” están explotadas como agostadero excepto 2-00-00 hectáreas sembradas de cítricos.- Está dividido en 6 potreros, todos cercados con alambre de púas sobre postería de cocuite y chaca. Entre sus construcciones se encuentra una casa-habitación de mampostería, 2 galeras, un corral de alambre, 2 pozos con brocal, siendo el lindero con el camino, señalado con postería de concreto.

ING. MANUEL LORENZO MARTINEZ HACHITY.- La fracción propiedad de este señor, se denomina “El Guineo”, consta de una superficie de 100-31-38 hectáreas, cuyos linderos y colindancias coinciden con los planos y escrituras de propiedad, están señalados con cercados de alambre y púas de 4 hilos sobre postería de cocuite y chaca y divididos en 11 potreros cercados en la misma forma de los linderos generales, los pastos son de zacate estrella y grama natural y se hacen barbechos para siembra de maíz forrajero para almacenarlo en el silo y ocuparlo para alimento de ganado vacuno que es la forma de explotación del predio, es decir de ganado de cría. En el predio existen las siguientes instalaciones y obras materiales: Casa del Administrador, 6 casas para vaqueros, 2 galeras para establos, una galera para ordeña, 2 galeras para becerros, 3 corrales de varenga, baño garrapaticida de inmersión, báscula, tanque para mieles, 2 tanques para agua, 2 bodegas, 3 toriles, tiene el predio Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 198849 de 15 de julio de 1968, a nombre del anterior propietario, pero corrido el traslado de dominio a favor del actual el 20 de julio de 1970 en el Registro Agrario Nacional.

ANGEL GARCIA DE LOS SALMONES.- La superficie de 70-04-92 correspondiente a dicho propietario, cuyo predio tiene actualmente la denominación de “María Irma”, se constató que tiene 26 hectáreas sembradas de caña de azúcar, 5 hectáreas de cítricos y plátano y el resto de potreros en los que se cría ganado vacuno. Entre obras existentes se encuentra una casa-habitación, 2 corrales de ordeña, una bodega, y un tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 10,000 l.- El predio tiene Acuerdo de Inafectabilidad Agrícola publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del 10 de mayo de 1974.

SIMON LOPEZ RECIO.- La superficie de 18-45-14 hectáreas la tiene dedicada a potrero y cítricos.

CLAUDIO, BRUNO y SILVANO JACOME RIVERO.- En total tienen una superficie de 54-56-74 hectáreas que aunque adquiridas en forma individual, se trabajan y usufructan mancomunadamente entre los tres hermanos. La explotación a que se dedican los terrenos es totalmente a la siembra de cítricos, de las variedades valencia, azúcar y jaffa.- Existe una casa-habitación para el encargado, un tractor con todos sus implementos y un remolque para acarreo de fruta o abono.

GILBERTO ORTEGA CARO.- La superficie total de 36-54-86 hectáreas de agostadero de buena calidad, está dedicado a potrero dividido en tres porciones, todas las cuales al igual que los linderos generales están cercados de alambre de púas sobre postería de cocuite y chaca, no existen construcciones, los pastos son de zacate estrella, grama y pangola.

JUAN JOSE MARTINEZ HACHITY.- Las 175-61-96 hectáreas forman el predio conocido como “El Manantial”, los terrenos son de agostadero de buena calidad, dedicados a la engorda de ganado vacuno, el cual tiene concedido por acuerdo de inafectabilidad publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día 6 de agosto de 1970 el Certificado de Inafectabilidad Agrícola ya citado en antecedentes y comprendiendo una superficie de 200-00-00 hectáreas. El predio está señalado en sus linderos generales y en sus 8 divisiones por cercados de alambre de púas sobre postería de cocuite y chaca, en el cual se lleva a cabo una explotación de engorda de ganado vacuno.- Los pastos son sabanas reforzados con zacate estrella. Dentro del predio se encuentra una casa-habitación de

mampostería en que radica el encargado, una galera y un silo, así como una represa para el agua y un pilancón para bebedero”.

DECIMONOVENO.- Turnada la anterior documentación al Cuerpo Consultivo Agrario, la Consultoría que conocía de los asuntos del Estado de Veracruz, por oficio número 0197, de diecinueve de abril de mil novecientos setenta y nueve, solicitó trabajos complementarios al Delegado Agrario de ese Estado para poder determinar la calidad y explotación de los predios denominados “El Guineo” o “El Zapotal” y “La Alianza”, ubicados en el Municipio de Martínez de la Torre. En cumplimiento de lo anterior, el Delegado Agrario comisionó personal por oficio 00300 de quince de mayo de mil novecientos setenta y nueve, quien rindió su informe el seis de julio del mismo año, del que se desprende que el predio denominado “El Guineo” o “El Zapotal”, se encuentra dividido en fracciones propiedad de distintas personas que las tienen en completa explotación de la manera siguiente: Alfonso Vázquez, dedicado a la agricultura de cítricos como toronja, naranja y limón; Juan Martín Ruiz, explota su fracción también con los cítricos antes mencionados; Emma Quintanilla de Alba, dedica sus terrenos en parte a la ganadería y en otra a la agricultura con cultivos de caña de azúcar; Simón López con cultivos de caña de azúcar y naranja; Claudio Jácome Rivera con cultivos de naranja; Bruno Jácome Rivera con cultivo de naranja; Silviano Jácome Rivera con cultivos de naranja; Juan José Martínez Hachity, Severo y Adrián Ortega Monfil, dedican sus terrenos a la ganadería; Manuel Lorenzo Martínez Hachity a la ganadería; Angel García de los Salmones dedica sus terrenos a la ganadería y a la agricultura con cultivos de naranja y caña de azúcar y Juan Martínez Ruiz, dedica sus terrenos a la ganadería. Asimismo, se deriva de los trabajos respectivos que las extensiones superficiales resultan coincidentes con las precisadas en el resultando décimo octavo de esta resolución.

Por lo que respecta al predio denominado “La Alianza” con 206-00-00 (doscientas seis hectáreas) de agostadero, propiedad de Ignacio Saenger Contreras, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola 26459, expedido con base en el Acuerdo Presidencial de veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve. Este predio se encuentra explotado en su totalidad y dedicado a la agricultura. Anexa el comisionado a su informe constancia de la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre, y de la Asociación de Citricultores.

Asimismo, se aprecia que los propietarios cuyos terrenos se encuentran dedicados a la explotación ganadera, presentaron copias de las patentes del fierro o marca de herrar.

Agrega el comisionado que la calidad de los terrenos investigados es de temporal y agostadero, no pudiendo obtener el coeficiente de agostadero, pero que de conformidad con las condiciones del suelo, la escasa capa arable y tratarse de zonas pedregosas, considera que dicho coeficiente es de 1-00-00 (una hectárea) por cabeza de ganado mayor. De lo anterior, se levantó acta el veinte de mayo de mil novecientos setenta y nueve, que fue firmada por los integrantes del Comité Particular Ejecutivo y campesinos solicitantes.

Comparecieron al procedimiento Juan Martínez Ruiz, Manuel L. Martínez Hachity, Juan José Martínez Hachity, Ignacio Saenger, Angel García de los Salmones, Claudio, Bruno y Silviano Jácome Rivera, en escrito de veintiuno de junio de mil novecientos setenta y nueve, manifestando que son propietarios de las diversas fracciones del predio “El Zapotal” y “La Alianza”, las cuales por su extensión y estar en completa y debida explotación en las actividades agrícolas y ganaderas constituyen pequeñas propiedades que no resultan afectables.

VIGESIMO.- El Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de trece de abril de mil novecientos ochenta y tres, aprobó Acuerdo en el que se ordena a la Delegación Agraria realizar trabajos complementarios.

VIGESIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo anterior, el Delegado Agrario en el Estado, por oficio 29365 del primero de julio de mil novecientos ochenta y tres, comisionó a Miguel Angel Meza García para llevar a cabo los trabajos ordenados.

El comisionado a que se hace mérito rindió su informe el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres, del que se desprende que procedió a la investigación de los predios siguientes:

a) Juan Martínez Ruiz, con superficie de 200-00-00 (doscientas hectáreas), el cual se ubicó en explotación ganadera localizándose 177 cabezas de ganado mayor, se hizo constar que el predio estaba totalmente explotado.

b) Enrique Gama Bustamente, con superficie de 200-00-00 (doscientas hectáreas) el cual se encontró en explotación ganadera contabilizándose 212 cabezas de ganado mayor. Se advirtió que el predio se encontraba totalmente explotado.

c) Simón López Recio, con superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) el cual se ubicó en explotación agrícola, con siembra de caña de azúcar. Se apreció que el predio está totalmente explotado.

d) Abelardo Martínez Ruiz, con superficie de 45-91-34 (cuarenta y cinco hectáreas, noventa y un áreas, treinta y cuatro centiáreas) el cual se ubicó en explotación agrícola con siembra de naranja tardía, conociéndose que el predio se encuentra totalmente explotado.

e) Manuel Lorenzo Martínez Hachity, con superficie de 206-81-60 (doscientas seis hectáreas, ochenta y un áreas, sesenta centiáreas) el cual se ubicó en explotación ganadera localizándose 212 cabezas de ganado mayor, concluyéndose que el predio se encuentra totalmente explotado.

f) Angel García de los Salmones, con superficie de 70-04-92 (setenta hectáreas, cuatro áreas, noventa y dos centiáreas) el cual se encontró en explotación ganadera localizándose 76 cabezas de ganado mayor, advirtiéndose que el predio se encuentra totalmente explotado.

g) Raúl Martínez Ruiz, con superficie de 94-50-00 (noventa y cuatro hectáreas, cincuenta áreas), de las cuales se afectó una superficie de 20-67-35 (veinte hectáreas, sesenta y siete áreas, treinta y cinco centiáreas) en favor del ejido denominado "Paso Viejo". Dicho predio se localizó en completa explotación ganadera.

h) Juan Martínez Lobato, con superficie de 70-19-80 (setenta hectáreas, diecinueve áreas, ochenta centiáreas) el cual se ubicó totalmente dedicado a la explotación ganadera.

Asimismo, se procedió a investigar los predios solicitados por los campesinos. En lo que corresponde al inmueble denominado "La Alianza", dicho predio se encuentra amparado con certificado de inafectabilidad número 26459, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, ubicándose en explotación ganadera, al tiempo que se localizaron potreros cubiertos de grama natural y apreciándose según cita del comisionado que el predio está totalmente trabajado.

En lo atinente al inmueble que pertenece a Pablo Zorrilla Garcés, quien según inscripción 515 de veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, adquirió una fracción de 600-00-00 (seiscientos hectáreas) de agostadero del terreno denominado "El Negro", dedicado a la ganadería, ubicado en la Ex hacienda de Larios y Malpica, Municipio de Tecolutla, fuera del radio legal de siete kilómetros del poblado peticionario, por venta que le hiciera Manuel Antonio Zorrilla Bello, albacea de las sucesiones de Manuel Zorrilla Bringas y Luz Bello de Zorrilla. Asimismo, se advierte que el referido propietario cuenta con un predio cuya superficie analítica es de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas) de temporal (aun cuando registralmente se mencionen 49-00-00 (cuarenta y nueve hectáreas), que adquirió según inscripción 863 de dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, de Enrique Olazo, de la finca rústica denominada "Cártago". De igual manera se localizó un inmueble a favor del mencionado Pablo Zorrilla Garcés, ubicado en la colonia Suriana con superficie analítica de 48-70-69 (cuarenta y ocho hectáreas, setenta áreas, sesenta y nueve centiáreas). Los predios de referencia se localizaron en explotación ganadera en su totalidad.

Por otro lado se colige que del terreno citado en primer término, el propietario realizó las siguientes ventas:

198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas), a Gabriel Zorrilla González, según inscripción 701 de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y uno.

202-00-00 (doscientas dos hectáreas), a Gilberto Víctor Zorrilla González, según inscripción 1292 de trece de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

200-00-00 (doscientas hectáreas), a Guillermo Zorrilla González, según inscripción 702 de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y uno.

Menciona igualmente el comisionado que los predios anteriores se ubican a setenta kilómetros del poblado peticionario, esto es en el Municipio de Tecolutla, Veracruz, fuera del radio legal de afectación del poblado que nos ocupa y que dentro del propio radio únicamente se localiza el predio "Cártago", con superficie de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas), apreciándose que dicha superficie se encuentra actualmente sembrada por su propietario con naranja y limón.

De lo anterior, el comisionado de referencia levantó acta circunstanciada el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y tres, que fue firmada por los integrantes del Comité Particular Ejecutivo y demás solicitantes de la ampliación.

VIGESIMO SEGUNDO.- El veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y siete, la Consultoría que conocía de los asuntos del Estado de Veracruz, solicitó al Delegado Agrario que comisionara personal de su adscripción a efecto de practicar trabajos complementarios en el predio "El Negro", propiedad de Pablo Zorrilla Garcés, y por oficio 22016 de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete, el Delegado Agrario designó personal para tal efecto, quien rindió informe de treinta y uno de agosto del propio año, del que se desprende lo siguiente:

El citado predio se compone de 600-00-00 (seiscientas hectáreas), y está formado por 3 fracciones todas ellas debidamente delimitadas con alambre de púas y dedicadas a la explotación ganadera, levantándose el acta correspondiente en la que se asienta el tipo de pasto, número de semovientes, composición de los suelos y coeficiente de agostadero y tipo de instalaciones.

Anexa el comisionado a su informe el acta de inspección ocular practicada en el predio denominado "El Negro", levantada con fecha veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en la que se hace constar que dicho predio está compuesto de 3 fracciones con superficie, la primera de 198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas), dedicada a la explotación ganadera, se encuentra delimitado en todo su perímetro con arboledas de cocuite y chaca, unidas con alambre de púas de 3 y 4 hilos. La superficie de esta fracción se encuentra cubierta con pastos naturales denominados sabana y costera y en poca proporción pangola y estrella, localizándose 168 cabezas de ganado bovino de la raza Indo-Brasil, de los cuales 2 son toros sementales, 112 vacas de cría, 42 novillonas, 12 toretes y 42 crías de entre 1 y 5 meses; la topografía es plana con pequeñas ondulaciones, el suelo es de una composición de arcilla franca arenosa de color gris clara con capa vegetal casi nula, aflorando en partes el tepetate, pudiéndose clasificar en un 80% de agostadero de mala calidad y el 20% de agostadero de buena calidad, con un coeficiente de agostadero de 1.5 hectáreas por unidad animal. En cuanto a las instalaciones se observó que existen 3 corrales, una galera de piso de cemento techado con lámina de asbesto, un baño de inmersión con capacidad de 12,000 L. con escurridero y manga, 100 m. de pesebres para alimentar el ganado, la casa-habitación, 1 aljibe, 2 corrales con postes de concreto y tubo, otra casa para vaqueros, 7 divisiones para rotación del ganado, 3 achicaderos para encierro y 2 represas.

La fracción número 2 con superficie de 202-00-00 (doscientos dos hectáreas), se encuentra dedicada a la explotación ganadera y delimitada con arboledas de cocuite y chaca, unidas con alambre de púas de 3 y 4 hilos. En cuanto a los pastos se observaron sabanas costeras y natural y pastan aproximadamente 138 vacas de cría y 38 becerros de la raza cebú. La topografía es plana con ligeras ondulaciones, el suelo tiene una composición de arcilla franca arenosa de color gris claro con capa vegetal casi nula, aflorando en partes tepetate, clasificándose en 85% de agostadero de mala calidad y el 15% restante como de agostadero de buena calidad con un índice de 1.5 hectáreas por unidad animal. En cuanto a instalaciones encontró un corral grande con piso de cemento y 6 divisiones y una galera grande con piso de cemento techada con lámina de asbesto, un baño de inmersión con escurridero, una manga y embarcadero, 2 casas-habitación con aljibe, 4 piletas para almacenar agua y un tractor con todo su equipo.

La fracción número 3 con superficie de 200-00-00 (doscientos hectáreas), se encontró delimitada en todo su perímetro con arboledas de cocuite y chaca unida por alambre de púas de 3 y 4 hilos y cubierto con pasto natural denominado sabana, en donde se sostienen aproximadamente 80 novillos de la raza cebú. La topografía y composición de los suelos es similar a las 2 anteriores fracciones, clasificándose como de agostadero con un coeficiente de 1.5 hectáreas por unidad animal.

Las instalaciones consisten en 1 corral mediano, un baño garrapaticida y 1 casa-habitación, además de un tractor agrícola con chapeadora.

VIGESIMO TERCERO.- En sesión de nueve de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el Cuerpo Consultivo Agrario ordenó nuevos trabajos complementarios respecto de las fracciones que integran el predio denominado "El Negro".

La Delegación Agraria comisionó al ingeniero Carlos Reyes Castañeda, de su adscripción, quien rindió su informe el catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve del que básicamente se observa que la información contenida en los trabajos precedentes, es similar al informe anteriormente transcrito, agregando que son dedicadas a la explotación de limón persa y la superficie restante a la explotación ganadera. Finalmente, el comisionado agregó que según información proporcionada por la antes

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el coeficiente de agostadero de estos predios es de 1.5 hectáreas por unidad animal.

VIGESIMO CUARTO.- En sesión de veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen positivo, proponiendo afectar en favor del poblado solicitante, una superficie de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas).

VIGESIMO QUINTO.- En sesión de once de octubre de mil novecientos noventa, el Cuerpo Consultivo Agrario, solicitó a la Dirección General de Procuración Social Agraria se comisionara personal de su adscripción para determinar el régimen de explotación del predio "El Negro", propiedad de Pablo Zorrilla Garcés, debiendo determinar además el coeficiente de agostadero a nivel predial.

VIGESIMO SEXTO.- El diez de junio de mil novecientos noventa y uno, el comisionado de la citada Dirección, rindió su informe correspondiente manifestando que el predio "El Negro", se encontraba subdividido en tres fracciones una de 198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas), otra con 202-00-00 (doscientas dos hectáreas), y otra más de 200-00-00 (doscientas hectáreas). Asimismo, se desprende que los mencionados predios los dedicaban sus propietarios a la explotación ganadera, como se comprueba con las instalaciones que existen, además de que encontró en los mismos ganado mayor y menor, clasificándose las tierras como de agostadero, con un coeficiente de 1.5 hectáreas por cabeza de ganado mayor, y cubriendo los propietarios los llenos totales en sus predios.

VIGESIMO SEPTIMO.- De igual forma en el tomo XX del expediente se ubica el informe de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres, realizado por el comisionado Carlos Reyes Castañeda, mediante el cual corrobora la situación jurídica del predio denominado "El Negro", el cual para efectos agrarios pertenece a Pablo Zorrilla Garcés, mismo que cuenta con una superficie de 600-00-00 (seiscientas hectáreas), la cual fue dividida en tres fracciones. La primera propiedad de Guillermo Zorrilla González con superficie de 200-00-00 (doscientas hectáreas) la cual adquirió del mencionado Pablo Zorrilla Garcés como consta en la inscripción 702 de la sección primera, tomo IX de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y uno, dedicada fundamentalmente a la explotación ganadera, en la que se ubicaron corrales, baño garrapaticida al tiempo que se localizaron sesenta vacas, dos toros y diecisiete novillos de la raza cebú suizo. Dicha fracción de terreno cuenta con certificado de inafectabilidad ganadera número 248558 de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cinco. En lo atinente a la segunda fracción de dicho predio, el mencionado Pablo Zorrilla Garcés vendió en favor de Víctor Zorrilla González, quien adquirió una superficie de 200-00-00 (doscientas hectáreas), lo cual se corrobora mediante la inscripción 1292, sección primera tomo XV de trece de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, dedicada a la explotación ganadera. Asimismo, esta fracción cuenta con certificado de inafectabilidad ganadera número 437637. En lo que corresponde a la tercera fracción, la misma cuenta con una superficie de 198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas) y fue adquirida por Gabriel Zorrilla González quien compró a Pablo Zorrilla Garcés, según consta en la inscripción 701, sección primera tomo IX de veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y uno, dedicada principalmente a la explotación ganadera. De igual forma cuenta con certificado de inafectabilidad ganadera, sin que se mencione por el comisionado el número del referido certificado. Asimismo, se desprende que la fracción de terreno en análisis fue vendida por Gabriel Zorrilla González a la Secretaría de la Reforma Agraria para satisfacer las necesidades del nuevo centro de población denominado "Salvador Díaz Mirón", perteneciente al Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz.

Se advierte que todas las inscripciones registrales se realizaron en el Registro Público de la Propiedad de Jalalcingo, Veracruz, determinándose que sigue vigente el coeficiente de agostadero anteriormente determinado de 1.5 hectáreas por unidad animal.

Obra en autos dictamen negativo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario el quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

VIGESIMO OCTAVO.- Por auto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el presente juicio en este Tribunal Superior, habiéndose registrado bajo el número 27/96, notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o. y 9o. fracción VIII, y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La presente resolución se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el diecinueve de junio de dos mil dos, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictada en el amparo directo número D.A.-4242/2001.

TERCERO.- De conformidad con el informe de veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y siete, rendido por el comisionado de la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz, se comprobó que los terrenos entregados por concepto de dotación de tierras y ampliación de ejido al núcleo solicitante se encuentran en total explotación, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La capacidad individual y colectiva del grupo solicitante quedó acreditada conforme a lo dispuesto por los artículos 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que radican en el núcleo de población denominado "Plan de Limón", Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, 37 (treinta y siete) capacitados en materia agraria.

De conformidad con lo anterior y al haberse satisfecho los requisitos precitados, se deduce la procedencia de la acción agraria que se analiza.

CUARTO.- Por lo que respecta a la sustanciación del expediente que se resuelve, se cumplieron las formalidades que norman el procedimiento contenidas en los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 288, 291, 292, 297, 304 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO.- Del estudio y análisis de los trabajos técnicos, informativos y complementarios de veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y siete, seis de julio de mil novecientos setenta y nueve y veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres, rendidos por los comisionados de la Delegación Agraria, los cuales quedaron relacionados en los resultandos decimoctavo, decimonoveno y vigésimo primero, respectivamente, así como con los datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, que corren agregados al expediente, e igualmente del análisis al plano informativo del radio legal, se llegó al conocimiento que dentro del mismo, se localizan los ejidos definitivos "El Cañizo", "La Poza", "El Flamenco", "La Piedril", "Martha Ruiz", "La Reforma", "La Defensa", "Palpoala Ixcan", "Colorado Chico", "Coapeche", "Vega Redonda", "Independencia", "Pompeya", "Cártago y su anexo Pueblo Viejo", "Loma de Las Flores", "Arroyo Negro", "Paso Viejo", "Las Lajas y su anexo Zaragoza" y "Poza del Tigre".

En este orden de ideas, al acceder las tierras anteriormente precisadas al régimen ejidal, resultan inafectables, de conformidad con lo contemplado por los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEXTO.- Por lo que respecta a los predios denominados "Independencia" y "Cerro Quebrado", señalados por los solicitantes como de posible afectación, se colige que en lo atinente al terreno mencionado en primer término, no se trata de un predio de propiedad particular sino de un ejido debidamente constituido como se deduce del informe rendido por el comisionado, el cual quedó vinculado en el resultando decimoctavo de esta resolución. Al informe correspondiente se le considera como una probanza documental pública en atención a lo preceptuado por los artículos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable en la especie, y se le otorga el valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por el numeral 202 del referido ordenamiento instrumental.

En lo que concierne al inmueble denominado "Cerro Quebrado", se advierte del propio informe que el comisionado indica que el predio de referencia no fue localizado bajo ese nombre dentro del radio legal de afectación, de lo que se infiere la imposibilidad de su análisis. De igual forma al informe respectivo se le confiere la calidad de documento público con valor probatorio pleno conforme a lo previsto por los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

SEPTIMO.- Por lo que respecta al predio denominado "La Alianza", el cual también fue señalado por los peticionarios como posiblemente afectable, se deduce del informe realizado por el comisionado, localizable en el resultando decimonoveno de esta sentencia, al cual se le atribuye el carácter de documental pública con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable en la especie, que dicho inmueble se localizó explotado en su totalidad, dedicado a la agricultura, al tiempo que se encontró amparado por el certificado de inafectabilidad número 26459 de veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.

Asimismo, el terreno en comento cuenta con una superficie de 206-00-00 (doscientas seis hectáreas) de agostadero, por lo que con base en tales características el predio resulta inafectable al encontrarse en explotación total, sin exceder los límites de la pequeña propiedad, localizándose el fundamento de esta consideración en la fracción XV del artículo 27 constitucional, así como en lo dispuesto por los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

OCTAVO.- En lo concerniente a los predios propiedad de Enrique Gama Bustamante, Abelardo Martínez Ruiz, Raúl Martínez Ruiz y Juan Martínez Lobato, resulta concluyente del informe rendido por el comisionado, el cual se ubica en el resultando vigésimo primero de esta resolución, al que se le otorga la calidad de documental pública con pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dichos predios se ubicaron explotados en su totalidad por sus propietarios, sin que excedieran los límites superficiales permitidos por la fracción XV del artículo 27 constitucional y por el numeral 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En este orden de ideas e igualmente con fundamento en los artículos 250 y 251 del ordenamiento citado en último lugar, los predios relativos resultan inafectables.

NOVENO.- Tocante al predio denominado "Guineo o El Zapotal", señalado por los integrantes del poblado petionario como de posible afectación se desprende que dicho inmueble se encontraba originalmente integrado por 1,771-00-00 (mil setecientos setenta y una hectáreas) de agostadero, de las cuales 603-00-00 (seiscientos tres hectáreas) se afectaron en favor del poblado "Paso Viejo".

La extensión superficial analítica restante, es decir 1,178-00-00 (un mil ciento setenta y ocho hectáreas) se segmentaron en diversas fracciones, cuyos propietarios quedaron relacionados en el resultando decimotercero de esta resolución, deduciéndose de los informes relativos a los cuales se les confiere la naturaleza jurídica de documental pública con pleno valor probatorio, conforme a los preceptos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles que los inmuebles referidos se ubicaron en debida explotación por sus propietarios, sin que tampoco excedieran los límites de la pequeña propiedad previstos en la fracción XV del artículo 27 constitucional y por el numeral 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En este orden de ideas e igualmente con fundamento en los artículos 250 y 251 del ordenamiento citado en último lugar, los predios relativos resultan inafectables.

DECIMO.- Ahora bien, en lo atinente al propietario Pablo Zorrilla Garcés, y de conformidad con los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta en primer término se procede a determinar la situación jurídica de los inmuebles pertenecientes al mencionado propietario Pablo Zorrilla Garcés. De acuerdo con las constancias que obran en autos, concretamente en el tomo VIII a fojas 33 a 41 relativo al informe del encargado del Registro Público de la Propiedad de Jalalcingo, Veracruz, de veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y tres, así como del informe expedido por el mismo encargado del Registro Público de dicha localidad, fechado el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, el cual se localiza a fojas 18 y 19 del tomo II del expediente, se deduce que el citado Pablo Zorrilla Garcés adquirió el predio denominado "El Negro" mediante operación de compraventa que le hizo Manuel Antonio Zorrilla en su carácter de apoderado de Manuel Zorrilla Bello, albacea de las sucesiones acumuladas de Manuel Zorrilla Bringas y Luz Bello de Zorrilla, con superficie de 600-00-00 (seiscientos hectáreas). Dicho acto jurídico fue inscrito el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y nueve en la referida Institución Registral bajo el número 515. De igual forma se advierte de la información correspondiente la existencia de diversas transmisiones de propiedad que el propio Pablo Zorrilla realizó respecto de varias fracciones del predio anteriormente referido, las cuales se remontan a mil novecientos sesenta y uno y mil novecientos sesenta y cuatro, como se desprende del informe relacionado en el resultando vigésimo séptimo de esta sentencia.

Por lo que se refiere al predio denominado "Cártago", con superficie analítica de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas), aunque la operación correspondiente se realizó respecto de 49-00-00 (cuarenta y nueve hectáreas), se colige de las propias constancias que dicho predio lo adquirió Pablo Zorrilla Garcés de la compraventa que efectuó a Enrique Olasco la cual fue inscrita en el Registro Inmobiliario de la localidad el dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete bajo el número 863. Con posterioridad el mencionado Pablo Zorrilla vendió en favor de Ana Rosa Mendoza de Zorrilla la mencionada superficie, la cual fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Jalalcingo, Veracruz, el dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cinco bajo el número 61 de la sección primera.

Por lo que corresponde al predio denominado "La Pirámide" ubicado en la colonia "Suriana", se advierte que según asiento registral 648 de la sección primera inscrito el veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, Pablo Zorrilla Garcés adquirió el mencionado lote de terreno marcado con el número 35, ubicado en la referida colonia del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con superficie de 50-17-00 (cincuenta hectáreas, diecisiete áreas), el cual transmitió en propiedad a Francisco Ramos Leal según inscripción 385, sección primera de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y tres.

Como se deduce de las inscripciones anteriores, al momento de haberse realizado la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado "Plan de Limón" el veintitrés de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, Pablo Zorrilla Garcés era propietario de los predios "El Negro" y "Cártago", en tanto que, respecto del predio ubicado en la colonia Suriana se advierte que al momento de efectuarse la solicitud de referencia por parte del poblado respectivo, Pablo Zorrilla Garcés no era propietario del predio denominado "La Pirámide", localizado en la colonia Suriana. Tanto a los informes rendidos por los comisionados, los cuales se encuentran relacionados en los resultandos vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de esta sentencia, así como a los informes registrales en comento, se les atribuye el carácter de documentales públicas con pleno valor probatorio en consonancia con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido emitido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones.

En lo que corresponde al tercer punto de concesión de amparo establecido por la ejecutoria que se cumplimenta relativo a la determinación de que el tantas veces citado Pablo Zorrilla Garcés era propietario del predio denominado "La Pirámide", el cual se encuentra ubicado en la colonia Suriana, se advierte como ya se mencionó precedentemente y con base en los informes rendidos por los encargados del Registro Público de la Propiedad de Jalalcingo, Veracruz, de veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y tres y dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, los cuales quedaron relacionados con antelación, se aprecia que según asiento registral 648 de la sección primera inscrito el veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, Pablo Zorrilla Garcés adquirió el mencionado lote de terreno marcado con el número 35, ubicado en la referida colonia del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, con superficie de 50-17-00 (cincuenta hectáreas, diecisiete áreas), el cual transmitió en propiedad a Francisco Ramos Leal según inscripción 385, sección primera de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y tres. En este orden de ideas se desprende que el mencionado Pablo Zorrilla Garcés adquirió dicho inmueble el veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, en tanto que la fecha de la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado "Plan de Limón", Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, data del veintitrés de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, por lo que al resultar posterior la adquisición de dicho terreno por parte de Pablo Zorrilla Garcés respecto de la fecha de la solicitud correspondiente, no debe considerarse para efectos agrarios el inmueble denominado "La Pirámide", como propiedad de Pablo Zorrilla Garcés.

En lo concerniente al cuarto punto que determinó la concesión del amparo, en virtud de que respecto del régimen de explotación del predio denominado "Cártago", se mencionó en el considerando vigésimo primero de la sentencia impugnada que dicho inmueble se localizó en explotación ganadera en tanto que con posterioridad se estableció en el mismo considerando vigésimo primero que el referido predio se ubicó explotado con naranja y limón, debe especificarse que, de conformidad con los trabajos técnicos informativos realizados por el comisionado Miguel Angel Meza García, así como del informe rendido por el mismo el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres, el cual se localiza a fojas 2 a 15 del tomo VIII

del expediente, el predio denominado "Cártago" se localizó dedicado "a la agricultura, actualmente sembradas de naranja y limón en producción, fracción considerada de temporal". Bajo esta tesis debe concluirse que al predio le corresponde una explotación agrícola en el que se cultivan naranja y limón.

Ahora bien, por lo que toca al segundo punto de concesión de amparo, inherente a la suma de la superficie de diversos predios propiedad de Pablo Zorrilla Garcés, uno de los cuales se encuentra fuera del radio legal de afectación como lo es el predio denominado "El Negro", con extensión de 600-00-00 (seiscientas hectáreas) en tanto que el inmueble denominado "Cártago", el cual sí se encuentra dentro del radio legal de afectación, sin que se precisaran las razones y fundamento legal que permitiera la acumulación de diversas superficies que no se encuentran dentro del radio legal de afectación del poblado solicitante, debe mencionarse lo siguiente.

De las constancias anteriormente relacionadas se deduce que Pablo Zorrilla Garcés es propietario de los predios denominados "El Negro", "La Pirámide" y "Cártago". Sin embargo, como quedó precedentemente analizado, el predio "La Pirámide" lo adquirió con posterioridad a la solicitud de segunda ampliación del poblado denominado "Plan de Limón", razón por la cual no debe considerársele como propietario para efectos agrarios únicamente por lo que toca a dicho predio.

Con fundamento en lo preceptuado por el numeral 209 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se considera que deben acumularse los predios propiedad de Pablo Zorrilla Garcés denominados "El Negro" y "Cártago", a pesar de que el primero de ellos se ubique fuera del radio legal del poblado mencionado.

Al efecto se transcribe la parte correspondiente del artículo en cita:

"Para los efectos de esta ley se consideran como una sola propiedad los diversos terrenos que pertenezcan a un mismo dueño, aunque se encuentren separados unos de otros, y los inmuebles que siendo de varios dueños sean poseídos proindiviso".

Bajo esta tesis, se considera que el referido Pablo Zorrilla Garcés acumula una superficie de 632-00-00 (seiscientos treinta y dos hectáreas), 600-00-00 (seiscientos hectáreas) de las cuales son de agostadero y dedicadas a la ganadería ubicándose un coeficiente de agostadero de 1.5 por unidad animal y las restantes 32-00-00 (treinta y dos) de temporal.

Ahora bien una vez establecido el fundamento de la acumulación superficial de Pablo Zorrilla Garcés, corresponde analizar si las propiedades con las que cuenta exceden o no los límites de la pequeña propiedad.

Al efecto resulta necesario transcribir diversos artículos tanto de la Constitución Federal como de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Artículo 27 constitucional fracción XV (partes conducentes):

"Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos".

Artículos 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria (partes conducentes):

"Artículo 249.- Son inafectables por concepto de dotación, ampliación o creación de nuevos centros de población, las pequeñas propiedades que están en explotación y que no exceden de las superficies siguientes:

- I. Cien hectáreas de riego o humedad de primera, o equivalencias establecidas por el artículo siguiente;
- II. Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por sistema de bombeo;
- III. Hasta trescientas hectáreas en explotación, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao árboles frutales;
- IV. La superficie que no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalencia de ganado menor, de acuerdo con el artículo 259;

Artículo 250.- La superficie que deba considerarse como inafectable, se determinará computando por una hectárea de riego, dos de temporal, cuatro de agostadero de buena calidad y ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos. Cuando las fincas agrícolas a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior, estén constituidas por terrenos de diferentes calidades la determinación de la superficie inafectable se hará sumando las diferentes fracciones de acuerdo con esta equivalencia".

Ahora bien la superficie de 600-00-00 (seiscientos hectáreas) del predio "El Negro" destinado a la ganadería, se localizó en explotación ganadera, de conformidad con los trabajos técnicos e informativos realizados por el comisionado Miguel Angel Meza García de primero de julio de mil novecientos ochenta y tres e igualmente, conforme a los realizados por el ingeniero Carlos Reyes Castañeda de catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve y asimismo con los efectuados por la Dirección de Procuración Social

de diez de junio de mil novecientos noventa y uno, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio en atención a lo preceptuado por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con el numeral 202 del propio ordenamiento, de lo que se advierte la explotación ganadera de dicho predio.

Lo anterior aunado al coeficiente de agostadero determinado en autos, de 1.5 por unidad animal, y con fundamento en lo establecido por el párrafo conducente de la fracción XV del artículo 27 constitucional que establece como límite de la pequeña propiedad tratándose de predios dedicados a la explotación ganadera, la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente, lo cual en el caso específico representa la superficie de 750-00-00 (setecientos cincuenta hectáreas), como producto de multiplicar las referidas quinientas cabezas de ganado mayor por 1.5 del coeficiente de agostadero por unidad animal, de lo que se deduce que Pablo Zorrilla Garcés, por este solo predio, tiene derecho a una extensión de superficie de 750-00-00 (setecientos cincuenta hectáreas), por lo que al tener 600-00-00 (seiscientos hectáreas) en explotación ganadera, no excede los límites de la pequeña propiedad.

Por otro lado, y en especial con lo contenido en los trabajos técnicos e informativos realizados por el ingeniero Miguel Angel Meza García, cuyo informe data del veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres, la totalidad de la extensión superficial del predio "Cártago", se localizó en explotación agrícola con sembradíos de naranja y limón, siendo tierras de temporal, por lo que las 32-00-00 (treinta y dos hectáreas) de este predio convergen en 16-00-00 (dieciséis hectáreas) de riego teórico, de lo que se deduce la explotación de este predio.

Con base en lo anterior se determina que los predios propiedad para efectos agrarios de Pablo Zorrilla Garcés, denominados "El Negro" con extensión superficial de 600-00-00 (seiscientos hectáreas) y "Cártago" con superficie de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas) resultan inafectables al haberse localizado en explotación y no exceder los límites de la pequeña propiedad, lo cual tiene su fundamento en lo establecido por la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Como se advierte de lo anterior, dentro del legal de siete kilómetros se localizaron fincas cuya extensión superficial no excede los límites constitucionales y legales considerados como pequeña propiedad, por lo que resulta concluyente que debe negarse por dicho motivo la acción de segunda ampliación de ejido al poblado denominado "Plan de Limón", ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- La presente resolución se emite en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el diecinueve de junio de dos mil dos, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo número D.A.- 4242/2001.

SEGUNDO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido, formulada por un grupo de campesinos del poblado denominado "Plan de Limón", Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz, al haberse reunido los requisitos legales.

TERCERO.- Es de negarse la segunda ampliación de ejido al poblado referido en el resolutivo anterior en virtud de no existir fincas afectables dentro del radio legal.

CUARTO.- Publíquense esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribábase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscribábase en el Registro Agrario Nacional.

QUINTO.- Notifíquese al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito respecto del juicio de amparo D.A.- 4242/2001, a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Veracruz y a la Procuraduría Agraria; ejecútense y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cuatro votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a tres de diciembre de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno**, **Luis Angel**

**López Escutia, Carmen Laura López Almaraz.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos,
Humberto Jesús Quintana Miranda.- Rúbrica.**